

Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

## VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO

### DEMANDA

**PRIMERO:** Que comparece doña Francisca Herrera Vial, abogada, cédula nacional de identidad N° 17.107.847-4, domiciliada para estos efectos en Av. El Golf, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, en representación de don **FRANCISCO JAVIER CRISTI CORTÉS**, chileno, ingeniero, cédula nacional de identidad N° 5.894.570-6, domiciliado para estos efectos en Av. El Golf 40, piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, quien interpone demanda por declaración de relación laboral, indemnizaciones laborales que se indican, indemnización por daño moral, prestaciones laborales y previsionales; acción de nulidad del despido, declaración de unidad económica, subterfugio y acción de nulidad civil que se indica; en contra de **1) CORPORACIÓN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA**, rol único tributario N° 71.477.600-2, representado por Jaime Duhart Aillón, cédula nacional de identidad N° 4.681.205-0, rector, ambos domiciliados en Huérfanos N° 1721, comuna de Santiago, Santiago, y de manera simplemente conjunta, en consideración a ser empleadores también, y/o por existir unidad económica entre las partes, en contra de **2) SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A.** (cuyo nombre de fantasía es "INSTITUTO PROFESIONAL VALLE CENTRAL"), rol único tributario N° 79.772.200-6, representada por Skandar Afif Hazbún Rezuc, Vicepresidente Ejecutivo, cédula nacional de identidad N° 13.400.989-6, ambos domiciliados en Dieciocho N° 193, comuna de Santiago y **3) UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA**, rol único tributario N° 71.639.300-3, representado por Jaime Duhart Aillón, cédula nacional de identidad N° 4.681.205-0, rector, ambos domiciliados en Pedro de Villagra 2265, comuna de Vitacura, Santiago y de manera simplemente conjunta, en consideración de existir unidad económica entre las mismas.



Expone que comenzó a prestar servicios para la demandada como “Director Nacional de Informativa” para la Corporación Universidad Bolivariana y para la Sociedad Educacional del Maule S.A. – Instituto Profesional Valle Central o Instituto Valle Central - el día 2 de febrero de 2018. Con fecha 3 de febrero de 2022, en reunión presencial con don Eduardo Ulloa, citada el día anterior vía Whatsapp, fue despedido verbalmente en consideración que la Universidad Bolivariana iba a dejar de existir a fines del año 2023, ya que se había fusionado con la Universidad de Aconcagua.

En cuanto a los servicios prestados señala que fue contratado a honorarios el día 2 de febrero de 2018 como Director Nacional de Informativa. Con fecha 15 de julio de 2019, la Universidad Bolivariana lo obligó a firmar un documento denominado “Transacción, Renuncia y Finiquito Francisco Javier Cristi Cortés”, instrumento que es ideológicamente falso y adolece de vicios de nulidad, puesto que siguió prestando los mismos servicios, bajo el mismo contrato con las mismas condiciones, al día siguiente de la firma de dicho instrumento.

Del mismo modo, alrededor del año 2020, la Universidad Bolivariana lo obligó a firmar otra transacción, renuncia y finiquito civil, distinta a la anterior, del cual no conoce su contenido ni fecha exacta de firma, toda vez que no se le entregó copia y al igual que en la situación anterior, al día después de la firma de dicho instrumento, siguió prestando los mismos servicios, bajo el mismo contrato de prestación de servicios y con iguales condiciones en funciones y remuneraciones, lo cual continuó ininterrumpidamente, hasta el día 3 de febrero de 2022.

La última remuneración mensual para efectos indemnizatorios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, ascendería a la suma de \$1.904.762.-

Refiere que prestaba servicios para la Universidad Bolivariana, Instituto Valle Central y la Universidad de Aconcagua, siendo el controlador de las tres



instituciones don Munir Nagib Hazbún Rezuc, siendo la Universidad Bolivariana quien pagaba sus remuneraciones.

Menciona que desde el 2 de febrero de 2018 hasta mediados de 2019, reportaba directamente a su superior jerárquico, don Héctor Valencia Bringas. Quien fue rector de la Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central. A mediados de 2019, don Horacio Ríos Domic comienza a prestar servicios en calidad de Director de Desarrollo Estratégico y luego rector, tanto para la Universidad Bolivariana como Instituto Valle Central. A partir de dicha fecha pasó a depender tanto para las funciones desarrolladas en Universidad Bolivariana como Instituto Valle Central, de Eduardo Ulloa, Vicerrector de las dos instituciones y también, de Horacio Ríos, Rector de las dos instituciones.

En marzo 2020 se inició la fusión de la Universidad Bolivariana con la Universidad de Aconcagua, la cual es adquirida también por don Munir Hazbún, por lo que el Rector Horacio Ríos comenzó a trabajar en forma integrada con el Rector de la Universidad de Aconcagua, don Bernardino Sánchez. En septiembre 2020, hasta la fecha del despido, don Bernardino Sánchez dejó la Rectoría de Universidad de Aconcagua, quedando don Horacio Ríos como el Rector de las tres instituciones, es decir, quedando como Rector de la Universidad Bolivariana, Universidad Valle Central e Instituto Valle Central. Durante la mayor parte del año 2020 y hasta marzo 2022, trabajó conjuntamente con Pablo Mutizábal Cárdenas, Director Nacional TI de la Universidad de Aconcagua.

Explica que pese a que formalmente prestó servicios bajo la modalidad de honorarios, en los hechos, durante los 4 años que prestó servicios, lo hizo bajo un vínculo laboral encubierto, que se reflejaba en su constante función de dirigir el departamento de informática, tanto de la Universidad Bolivariana como del Instituto Profesional Valle Central, representarla como su cabeza y por lo demás, incluso llegando a tener tres subordinados.



Señala que fue Director Nacional de Informática de la Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central durante 4 (cuatro) años continuos. Luego en marzo de 2021, comienza a prestar servicios para la Universidad de Aconcagua hasta el término de la relación laboral. Conforme al correspondiente contrato de prestación de servicios a honorarios que firmó con la Corporación Universidad Bolivariana, en la cláusula primera se establecían como funciones las de asesoría, mantención, coordinación y gestión de todos los sistemas informáticos y servicios complementarias para la Corporación Universidad Bolivariana y además con las instituciones con las cuales la Corporación Universidad Bolivariana mantiene convenio de colaboración recíproca, esto es, con la Sociedad Educacional del Maule S.A., el CFT Barros Arana Limitada [sic] e E-Valley SpA. y en la cláusula segunda se indicaron como funciones especiales las de Fiscalizar, optimizar e instruir las siguientes labores, sin perjuicio de las laborales adicionales que le corresponden en virtud del Manual de cargo de la Institución - Controlar y revisar la información en U+, la correcta imputación de la información, la instalación y configuración del sistema U+ en los clientes, Implementar, Administrar y revisar Plataforma Moodle y Aulas Virtuales que desarrolle la Institución. Actualización constante de los recursos tecnológicos que necesite la plataforma. Administrar la base de datos de los alumnos. Coordinación con los encargados de soporte la plataforma en las sedes de la institución, Desarrollar y evaluar nuevas Aulas Virtuales para el uso interno y externo, Recepcionar y soportar lo relacionado a las plataformas de aprendizaje de los alumnos, Explotación de Bases de Datos, actualización y mejora de sitios Web, desarrollo de aplicaciones web y servicio e integración de tecnologías, Administrar sistema informático en la sede, Realizar soporte informático y controlar permanentemente estas acciones, Administrar conectividad a nivel nacional de manera óptima.

También participaba en los “Comités Directivos” o “Comités Estratégicos” como se les denominaba indistintamente de la Universidad Bolivariana, el cual tenía lugar todos los lunes entre las 10.00 y 12.00 horas aproximadamente. Dichos comités eran presididos por el Rector Héctor Valencia Bringas, o por quien lo



reemplazara, en su calidad de Rector de la Universidad Bolivariana y también como Rector de Instituto Valle Central y en estos participaban 12 (doce) personas, en específico, los vicerrectores nacionales, los directores nacionales y el pro rector de ambas instituciones, don Skandar Hazbún Rezuc, primo de don Munir Hazbún Rezuc, único controlador de las tres instituciones demandadas, el Vicerrector Económico de la Universidad Bolivariana, don Eduardo Ulloa, quien además era Vicerrector de Administración y Finanzas de Instituto Valle Central. Asistían los Directores Nacionales, dentro de los que se encontraba él en su calidad de Director Nacional de Informática, doña Jessica Fuentes (Directora Nacional de Calidad), Mariela López Hernández (Directora Nacional de Contabilidad); don Eduardo Riady Hazbún (Director Nacional de eValley), doña Lorena Montiel Casanova (Directora Nacional de Admisión), Claudia de la Cerda Heidemann (Directora Nacional de Marketing), doña Sandra Guerrero (Encargada de Marketing). Corresponde precisar que todos estos directivos tenían dependencia directa del rector Valencia, o quien luego lo reemplazaba.

Ante estos comités se daba cuenta de los avances, gestiones realizadas y necesidades que se presentaban en los diversos aspectos de la Universidad Bolivariana. Adicionalmente, se preocupaba de la mantención de los contratos en el área de informática, como lo es telefonía, internet, MPLS (conectar todas las sedes con tráfico de datos, voz y video conferencia), licencias de software, entre otras. Debía mantener en orden y operativos los computadores de alto tráfico con los alumnos, de la universidad y el instituto, lo cual implicaba comprar memorias, accesorios, discos duros, entre otros componentes que así lo permitieran. Por otra parte, se encargaba de controlar el RP interno de la universidad e instituto, que es el sistema de gestión administrativa.

En cuanto a la jornada y de acuerdo al contrato de prestación de servicios no tenía jornada, pudiendo ejercer funciones desde su casa si lo deseaba, llegar a la hora que quisiera e irse a la hora que quisiera. Sin embargo, en los hechos, en consideración a la naturaleza de sus funciones y su cargo, por requerirse de su



presencia tanto en la Universidad como en el Instituto Profesional cumplía una jornada presencial que excedía de 45 horas a la semana, distribuida de lunes a viernes, entrando a trabajar, entre las 9:00 y a las 19:00 horas. La naturaleza de sus funciones, detectar fallas de redes, arreglar computadores de alto tráfico, indagar qué piezas o repuestos son los que se necesitan, entre otras, controlar y dar órdenes al equipo de trabajo, requerían necesariamente su asistencia de lunes a viernes a las oficinas ubicadas en Eleodoro Yáñez, que era una sede tanto de la Universidad Bolivariana como del Instituto Valle Central. En agosto del 2019, fue trasladado a una oficina de la sede de Instituto Valle Central, ubicado en Dieciocho 193, comuna de Santiago.

Explica que el cargo de Director Nacional de Informática, depende jerárquicamente, en un principio del rector de la Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central, don Héctor Valencia. Luego, a mediados de 2019, pasó a depender de don Horacio Ríos, que llegó como rector de la Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central. Posteriormente, pasó a depender de don Eduardo Ulloa por parte de la Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central. A partir de agosto 2020, cuando se adquiere la Universidad Aconcagua, comenzó a prestar funciones para las tres instituciones. Por otra parte, al tener un cargo de jefatura, tenía bajo su responsabilidad jerárquica y dirección a tres personas, Daniel González Farías, técnico soporte de la Zona Sur, Francisco San Martín, técnico soporte de la Zona Norte, John Rivero, desarrollador y administrador de Base de Datos. Pablo Icaza Soletic, desarrollador.

Señala que se reunía diariamente para efectos de entregarles sus funciones diarias, planificar el trabajo en el departamento, entre otras cosas. De acuerdo al organigrama que inserta en la demanda formaba parte de la estructura interna- y no solo un asesor externo como se pretende por las instituciones demandadas- que tiene tanto un jefe como dependientes directos con los cuales:

- Se reunía periódicamente para coordinar el trabajo en el Departamento de Informática.
- Autorizaba permisos, vacaciones, horas extras a sus subalternos.
- Les ordenaba



ciertas tareas a cumplir, así como también les instruía que debían realizar durante su jornada. • Evaluar el desempeño de sus subordinados anualmente. A modo de ejemplo, firmó certificado en favor de un trabajador subalterno, es decir, en su supuesta calidad de “asesor externo”, tenía un cargo de jerarquía, ejerciendo jefatura sobre todo un departamento y rindiendo cuenta a las altas autoridades de la Universidad Bolivariana y el Instituto Valle Central.

Agrega que para efectos de comunicarse en su calidad de Director Nacional de Informática de Universidad Bolivariana e Instituto Profesional Valle Central, utilizaba dos correos electrónicos institucionales • Francisco.cristi@vallecentral.cl y Francisco.cristi@ubolivariana.cl. Firmaba diversos documentos y cotizaciones en esa calidad. En el mes de diciembre recibía aguinaldo.

Por otra parte desde marzo de 2020 prestó servicios. Corresponde indicar, que desde el mes de marzo del año 2020, prestó servicios en la Universidad de Aconcagua. Se comunicó la fusión entre la Universidad Bolivariana con la Universidad de Aconcagua. Don Munir Hazbún, único controlador de la Universidad Bolivariana adquirió por medio de diversas sociedades, la Universidad de Aconcagua. Se hizo un comunicado el día 31 de marzo de 2021, de boca de ambas universidades, sobre una supuesta “alianza estratégica”, un “proceso de integración gradual”, que implicaba traspasar todos los alumnos de la Universidad Bolivariana a la Universidad de Aconcagua. Se indica en el mismo comunicado: “Ahora bien, los medios de comunicación informaron que más que una integración gradual o alianza estratégica entre ambas instituciones educacionales, se trataba de una fusión entre las mismas. Corresponde indicar que desde marzo de 2020, el señor Cristi comenzó a prestar servicios indistintamente para la Universidad de Aconcagua, Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central. En dicho sentido, comenzó a representar en materia de tecnologías a la Universidad de Aconcagua, toda vez que aparecía como participante de reuniones y solicitante de cotizaciones. A modo de ejemplo, en una reunión de fecha 4 de julio de 2021, con la empresa Bettersoft, aparece en el acta de la reunión.

Señala que mientras que en el contrato de trabajo, presta sus servicios de manera permanente y que se constituyen como propios de la institución, en el contrato a honorarios el profesional presta sus servicios de forma independiente, a título de asesoría, consulta o investigación respecto de un trabajo o bien en función de una obra o proyecto determinados. Prestó servicios a favor de la Universidad Bolivariana, el Instituto Valle Central y posteriormente, la Universidad Aconcagua, manejando el Departamento de Informática de todas estas instituciones por aproximadamente 4 años, de forma constante, sujeto a una jornada de trabajo de 45 horas en los hechos. Las tres instituciones tenían un controlador común, en las cuales se mezclan capitales, gastos y hasta los vehículos familiares de dicho controlador. Las labores las desarrolló en un contexto de permanencia y en razón a una labor intrínseca de un departamento de Informática, es decir, como funciones propias de dichas instituciones y no correspondió en la práctica a la ejecución de labores específicas como consultorías o de asesoría, siendo éstas últimas propias de la contratación a honorarios.

En el contrato de trabajo, el trabajador no solo tiene la obligación de asistir a prestar sus servicios, sino que también debe hacerlo de forma regular y periódica en las dependencias de la empresa, de manera tal que constituye una obligación el cumplir con la jornada de trabajo pactada en el contrato. Esto constituye un índice de una relación de subordinación y dependencia. En la práctica, cumplió durante por cerca de 4 años con una jornada de trabajo semanal de 45 horas que se distribuía de lunes a viernes, desde las 9:00 horas y retirándose desde las 19:00 horas, con una hora de colación, de la cual en muchas oportunidades no hacía uso. Sin perjuicio que no se regulara por un libro de asistencia, dicha jornada existía de facto y era necesario para el correcto desempeño del Departamento de informática de las instituciones referidas. En cuanto a la supuesta jornada de 22 horas que hace referencia la carta de no renovación, no entiende de dónde provino aquello, ya que nunca se le informó.



En el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios en las dependencias de la institución, de forma regular y continua. En cambio, en el contrato a honorarios, el profesional trabaja por su cuenta y la asistencia a la empresa es esporádica, irregular y discontinua o puede ser que siquiera exista. En la especie, cumplía su jornada laboral en dependencias del Instituto Valle Central, esto es, en Dieciocho N° 193, comuna de Santiago. Por otro lado, contaba con todos los insumos necesarios para su gestión administrativa de Director Nacional de Informática, esto es, oficina, escritorio, computador, silla, artículos de oficina, papelería, impresora, scanner, correos electrónicos tanto de la Universidad Bolivariana como por Instituto Valle Central, etc., todos suministrados por ambas instituciones y posteriormente también, por Universidad de Aconcagua.

En el contrato de trabajo, la retribución que obtiene el trabajador a cambio de la prestación de servicios que realiza, se denomina remuneración. Mientras que, en el contrato a honorarios, el pago se denomina honorario. En la práctica, emití boletas de honorario a nombre de la Corporación Universidad Bolivariana recibiendo la contraprestación directamente de la institución demandada y sus recursos se mezclaban con los de Instituto Valle Central, por lo cual, en la práctica no se puede establecer a ciencia cierta la procedencia, pudiendo ser de cualquiera de las personas jurídicas demandadas. Corresponde indicar, que el demandante para acceder al pago de la remuneración mensual que le correspondía debía emitir una boleta de honorarios por la remuneración mensual, la que le era exigida por su empleadora mes a mes.

Describe la boletas de honorarios emitidas durante el periodo en que prestó sus servicios desde marzo de 2018 hasta febrero de 2022.

Reitera que las contrataciones a honorarios no eran tales puesto que éste elemento de continuidad de labores en el tiempo, se opone a uno de los aspectos que configura el contrato de trabajo conforme la normativa laboral vigente, puesto que la continuidad es absolutamente contraria al aspecto temporal y específico que admite este tipo de contrataciones liberal y a honorario, que en la especie, no



cumplía. La continuidad encuentra su comprobación en las sucesivas boletas de honorarios, emitidas por mi representado a favor de la Universidad Bolivariana, aun cuando hubieren existido finiquitos firmados comprobando una labor exclusiva a la demandada, en los términos que lo realiza un trabajador sujeto a una relación laboral.

Respecto de la Transacción, Renuncia y Finiquito, suscritos con la Corporación Universidad Bolivariana, adolecen de nulidad absoluta por objeto ilícito, al contravenir el derecho público chileno y de manera subsidiaria nulidad relativa, al haberse celebrado con el vicio de fuerza. De

Con fecha 15 de julio de 2019, se celebró el documento denominado Transacción, Renuncia y Finiquito Francisco Javier Cristi Cortés con la Corporación Universidad Bolivariana, representada por Jaime Duhart Aillon. Al rededor del año 2020, se celebró otro documento denominado “Transacción, Renuncia y Finiquito Francisco Javier Cristi Cortés”, cuyo contenido, desconoce toda vez que no se le entregó copia. Según consta en punto Primero del mencionado documento, declara prestar servicios profesionales independientes para la Corporación Universidad Bolivariana y aquellas instituciones con las cuales la Universidad tiene convenio de colaboración recíproca, esto es, con la Sociedad Educacional del Maule S.A., de Formación Técnica Barros Arana Ltda. e E-Valley SpA. Asimismo, se deja constancia que entre las partes existe sólo una relación de carácter civil, regida por las normas del Código Civil. Consta también que los servicios profesionales se prestaron entre el 2 de febrero de 2018 al 30 de junio del año 2019, detallándose al efecto las boletas de honorarios giradas en dicho período. En el punto Tercero, las partes acuerdan celebrar el contrato de transacción “con el objeto de precaver cualquier eventual litigio a su respecto, así como a cualquier materia concerniente al vínculo que los liga (...) en este mismo acto, renuncia expresamente a toda y cualquiera acción, reclamo, derecho o pretensión de cualquier índole, naturaleza o especie en contra de la Corporación Universidad Bolivariana por concepto de prestaciones de servicios en todo el período en que



ha prestado servicios profesionales (...). El citado documento continúa en su punto Cuarto describiendo la renuncia a sus pretensiones, “en todo el período que ha prestado servicios profesionales para la Corporación Universidad Bolivariana, así como por cualquier otro concepto, lo que hace igualmente extensivo a sus controladores, representantes, administradores, ejecutivos, dependientes, especialmente a don Munir Nagib Hazbún Rezuc y don Skandar Afif Hazbún Rezuc, y en general, respecto a cualquier entidad o persona relacionada a éstas, otorgando a todas las referidas personas o entidades, sin limitaciones ni excepciones o reservas de ninguna especie, el más completo, cabal, amplio y definitivo finiquito.” (subrayado y destacado es nuestro). En el punto Quinto, el señor Duhart en representación del establecimiento educacional acepta la renuncia y finiquito; y en el punto Sexto el señor Cristi declara expresamente que durante la vigencia del contrato sólo se ha dedicado a las labores propias de profesión, y que “bajo ningún concepto ha trabajado para algún empleador ya sea persona natural o jurídica, señalando además que la presente declaración la formula en forma libre y espontánea, sin haber recibido presiones de carácter indebidas de ninguna especie o naturaleza”.

Las transacciones y finiquitos fueron suscritos bajo un manifiesto temor.

Alude a los requisitos de la fuerza como vicio del consentimiento y sus requisitos, grave, injusta y determinante y a sus consecuencias

En cuanto a las prestaciones adeudada, señala que se le adeudan las remuneraciones desde octubre 2021 a febrero de 2022. En el siguiente detalle; Octubre 2021 \$1.904.762 Noviembre 2021 \$1.904.762 Diciembre 2021 \$1.984.762 Enero 2022 \$1.904.762 3 días de febrero 2022 \$507.936 TOTAL \$8.206.984 y adicionalmente se le adeuda una remuneración por \$100.000 correspondiente a un aguinaldo recibido en el mes de diciembre el que se convierte en un derecho adquirido mediante cláusula tácita.



En cuanto a las cotizaciones previsionales, corresponde el pago en AFP Capital y AFC CHILE. Señala que él se pagaba la Isapre todos los meses por lo que nada se adeuda por dicho concepto. Por otra parte, la AFP Capital, durante el periodo comprendido entre febrero de 2018 y septiembre de 2018, fue pagada parcialmente con otros servicios prestados, adeudándose solamente las diferencias que indica.

En relación a la sanción de nulidad pide que se condene a las demandadas a la sanción de nulidad del despido,

La indemnización sustitutiva del aviso previo y años de servicios por la suma de \$1.904.762 y \$7.619.048, respectivamente, esta última por cuatro años de servicio.-

Feriado legal y proporcional por un total de 43 días totales de vacaciones, lo cual arroja un total de \$2.730.159.-

El aguinaldo del mes de diciembre ya señalado, gastos por rendir \$500.000.-

Daño moral en consideración a la lesión, menoscabo físico y psicológico, las perturbaciones psíquicas que produjeron el actuar de la Universidad Bolivariana, Instituto Valle Central y Universidad de Aconcagua, produciendo un dolor susceptible de ser indemnizado. La Universidad Bolivariana que se estaba fusionando con Universidad de Aconcagua, y que siempre actuó de facto como un “bolsillo” común con Instituto Valle Central, dejó de pagar las remuneraciones representado desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022. Comenzó una negociación extracontractual para que le pagaran las remuneraciones adeudadas, lo cual, trajo como consecuencias que comenzaran a aplazarlo, a citarlo a reuniones que luego cancelaban, a no contestarle el teléfono, incluso, asistiendo con su abogada a las dependencias de la Universidad Bolivariana y Universidad de Aconcagua lo que produjo consecuencias en su psiquis que se tradujeron en situaciones realmente tormentosas y dignas de ser reparadas, lo que valúa en \$ 9.523.810.- Lucro cesante al haber estado 5 meses sin posibilidad alguna de



prestar servicios luego de su despido por encontrarse incapacitado, que avalúa en \$ 9.523.810.- Total \$21.883.220 Daño emergente relativo a los intereses máximos bancarios, anticresis y multas por no pagar por uso de tarjeta de crédito durante los meses que estuvo sin recibir remuneración, avaluables aproximadamente en \$2.000.000.- a lo anterior agrega que el lunes 3 de enero de 2022, habiendo pasado 4 meses impagos de sus remuneraciones, producto de la depresión que le ralentizaba el pensamiento, chocó con un camión, lo cual le produjo más preocupaciones, le y gastos extras, al haber chocado con pérdida total un vehículo marca Subaru Legacy del año 2011, y aumentó su angustia. Dicho episodio, consecuencia de sus remuneraciones impagas, implicó lo siguiente: Daño psíquico y moral por haber chocado que estima en 2 remuneraciones \$ 3.809.524.- En síntesis • Daño Moral: \$26.908.924.- • Lucro Cesante: \$ 9.523.810.- • TOTAL: 36.432.734.-

En cuanto a la acción de multirrut, cita el artículo 3 del Código del Trabajo y desarrolla los elementos que configuran la unidad de empleador, junto con mencionar diversa jurisprudencia y pide se declare la unidad económica entre Instituto Valle Central, Universidad Bolivariana y Universidad de Aconcagua.

Del mismo modo se refiere a la existencia de un subterfugio en el que han incurrido las demandadas, conforme lo establece el Código del Trabajo en el artículo 507 En este caso no se le han pagado cinco meses de remuneraciones, siendo que prestaba servicios para las 3 (tres) instituciones demandadas. Por otra parte, como se explicó anteriormente, el único controlador es el señor Munir Hazbún, por lo que simplemente no se entiende que no se le haya pagado ningún peso. Para este caso solicita se aplique una multa de 300 UTM.

Por lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 3°, 4°, 7, 8, 162, 163, 168, 172, 507 y siguientes del Código del Trabajo, los principios generales del Derecho y demás normas legales aplicables, pide tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general de declaración de relación laboral, indemnizaciones laborales y previsionales, nulidad del despido, indemnización por daño moral,



prestaciones laborales, unidad económica y subterfugio, en contra de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA; SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A. nombre de fantasía "INSTITUTO PROFESIONAL VALLE CENTRAL Y de UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA, acogerla y declarar: 1) Que se reconoce que existía una relación laboral de carácter continua entre don Francisco Cristi Cortes, bajo vínculo de subordinación y dependencia de forma simplemente simultánea con Instituto Valle Central y Universidad Bolivariana, desde el 2 de febrero de 2018 al 3 de febrero de 2022, y con Universidad de Aconcagua simultáneamente, desde el mes de marzo de 2021 al 3 de febrero de 2022. 2) Que se adeudan a mi representado, las siguientes prestaciones: a. Remuneraciones pendientes desde octubre de 2021 al 3 de febrero de 2022, por la suma de \$8.206.984, b. Indemnización sustitutiva de aviso previo, por la suma de \$1.904.762.- c. Indemnización por 4 años de servicios: \$7.619.048.- d. Feriado legal y proporcional por 30 días hábiles, por la suma de \$2.730.159.- e. Aguinaldo del mes de diciembre de 2021, por la suma de \$100.000.- f. Gastos por rendir por la suma de \$500.000.- g. Cotizaciones previsionales de AFP Capital y AFC Chile, por todo el periodo trabajado, entre el 2 de febrero de 2018 y el 3 de febrero de 2022. 3) Que las demandadas sean condenadas a la sanción de nulidad del despido por cotizaciones impagas. 4) Que se conceda indemnización por daño moral, por la suma de \$26.908.925.- 5) Que se conceda indemnización por lucro cesante por la suma de \$9.523.810.- 6) Que se declare la nulidad civil de los documentos denominados Transacción, Renuncia y Finiquito, conforme se indica en el cuerpo del escrito, o la nulidad absoluta. 7) Que se declare la existencia de una unidad económica, conforme el artículo 3° del Código del Trabajo, entre las demandadas, esto es 1) Corporación Universidad Bolivariana; 2) Sociedad Educacional Del Maule S.A. y 3) Universidad de Aconcagua. 8) Que se condene a las instituciones demandadas por subterfugio. 58 9) Intereses legales y reajustes en las indemnizaciones que proceda y 10) Costas.

## CONTESTACION



**SEGUNDO:** Que en representación de la **CORPORACIÓN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA**, compareció don OSCAR SUAREZ ALCAYAGA, abogado, todos domiciliados en Avenida Santa María N° 1926, comuna de Providencia, Santiago.

**Opuso excepción de caducidad** de la acción de despido injustificado, en razón de que el actor señala que fue despedido verbalmente, con fecha 3 de febrero de 2022. El artículo 168 del Código del Trabajo, señala que el plazo para demandar por despido injustificado, indebido o improcedente, es de 60 días hábiles, contados desde la separación del trabajador; plazo que, en ningún caso, podrá exceder de 90 días hábiles, contados desde la separación del trabajador. La demanda de autos se interpuso con fecha 11 de julio pasado, es decir, una vez que ya había caducado el derecho del demandante para alegar el despido injustificado, indebido o improcedente. Previo traslado fue rechazada en la audiencia preparatoria.

**Alegó la prescripción** de los feriados legales correspondientes a los años 2018 y 2019, atendido el tiempo transcurrido desde que se devengaron dichos feriados legales.

Sin perjuicio, contestó la demanda solicitando su rechazo exponiendo que niega categóricamente los hechos expuestos en el libelo de autos y en lo que dice relación con la solicitud de declaración de unidad económica, debe ser rechazada, toda vez que la Corporación Universidad Bolivariana no tiene relación alguna con la “Sociedad Educacional del Maule S.A.” ni con la “Universidad de Aconcagua”; siendo sus socios controladores: “Centro de Tecnología y Comercio Marítimo”, Rut 76.232.200-5, “Compañía Minera Ovalle Oriente SpA”, Rut 77.336.058-8, “STN SpA”, Rut 76.508.911-5, “Inversiones Capital Link SpA”, Rut 77.327.055-4, e “Inverbanx SpA”, Rut 77.187.879-2; todas representadas por don Carlos Cáceres Valdebenito. Si bien en algún momento existió un convenio de colaboración entre la Universidad Bolivariana, la “Sociedad Educacional del Maule S.A.” y la “Universidad de Aconcagua”, dicho convenio hoy no se encuentra vigente. No se dan los presupuestos establecidos en el artículo 3º del Código del Trabajo, para



que exista una unidad económica empresarial entre mi representada y la “Sociedad Educacional del Maule S.A.” y la “Universidad de Aconcagua”.

En cuanto a la demanda de declaración de relación laboral, también solicitó su rechazo, toda vez que los servicios profesionales prestados por el demandante lo fueron bajo las normas del Código Civil, esto es, sin vínculo de subordinación ni dependencia, toda vez que el demandante no estaba sujeto en ningún caso al cumplimiento de horario, ni estaba bajo las órdenes o dirección de su representada, las desarrollaba de manera autónoma e independiente, tal como reza su contrato en la cláusula tercera. Menciona que parece ilógico que el demandante haya estado trabajando, durante 4 años, con un “contrato de prestación de servicios a honorarios”, y no haya alegado nunca, durante esos 4 años, una supuesta relación laboral con su representada.

Por lo expuesto y de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes del Código del Trabajo, pide tener por contestada la demanda y rechazarla íntegramente, con costas.

**TERCERO:** Que en representación de la **CORPORACION UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA**, comparece don Roberto Jaime Andrés De La Fuente Vásquez, abogado, chileno, casado, cédula de identidad 12.486.683-9, ambos domiciliadas para estos efectos en calle Pedro de Villagra N°2265, comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

**Opuso excepción de caducidad** de la acción de despido injustificado, indebido o improcedente y por consecuencia, se declaran caducas las prestaciones demandadas relativas a los años de servicios e indemnización sustitutiva del aviso previo. Indica que la demandante señala en el líbelo que habría sido supuestamente despedido el día 3 de Febrero de 2022. La demanda fue ingresada el día 11 de Julio de 2022 y no se acompaña a la demanda reclamo ante la Inspección del Trabajo, ni su parte ha recibido notificación alguna de reclamo administrativo, por lo que el plazo de caducidad de la acción de despido



injustificado, indebido o improcedente, no se ha suspendido. La ley prevé en inciso primero del art. 168 del Código del Trabajo, que el plazo para ejercer la acción de despido injustificado indebido o improcedente será de 60 días hábiles desde contados desde la separación del trabajador. De esta manera, el plazo para presentar la acción de despido injustificado, indebido o improcedente caducó el día 14 de Abril de 2022, que por mandato legal, es la única forma, fuera de la causal necesidades de la empresa del art 161 inciso primero, que permite el cobro de la indemnización por años de servicios y sustitutiva del aviso previo que fueron solicitados en la demanda. Pide se acoja la excepción y se declare caduca la acción de despido injustificado, indebido e improcedente que habilitan el cobro de las sumas indicadas en el petitorio de la demanda, de indemnización por años de servicios y sustitutiva del aviso previo, con costas.

En subsidio contestó la demanda, señalando los hechos expuestos en la demanda, son falsos e imprecisos, por lo que niego uno a uno, todos y cada uno de ellos, debiendo acreditarlos la contraria de conformidad a lo establecido en el art. 1698 del Código Civil.

Controvierte circunstanciadamente los siguientes hechos: 1. Se niega la existencia de relación laboral con el demandante; no contrató al demandante ni civil, ni laboralmente, jamás cumplió horarios, no firmó asistencia, no curso solicitud de vacaciones, ni tuvo supervisión de personal de nuestra dependencia. La única relación que existe con las otras co demandadas fue un convenio de ayuda recíproca (común en instituciones de educación superior) hoy no vigente entre la Universidad Bolivariana y mi representada. 2. Que en mérito de lo anterior, no le consta ninguno de los hechos que relata en la demanda, ni las prestaciones demandadas. Con todo, la demanda adolece de serias faltas a la lógica jurídica, en especial principios de identidad, contradicción y razón suficiente, al que no solo las sentencias son obligatorio seguir, puesto toda presentación de hecha a un tribunal debe tener un contenido reproducible por la razón, sino ella quedaría sin causa a pedir. Ella se ve manifestada en lo siguiente: a) No se indica que periodo



se demandan de feriado legal y proporcional, indica 15 días por cada concepto. Con ello se infringe además el debido proceso en razón a indicar la demanda se mantendría una relación laboral desde el año 2018, podría indicar se adeuda por cualquiera de los cuatro años., no pudiendo oponer la respectiva excepción de prescripción (infringe razón suficiente e identidad) b) No precisa a que periodo corresponde la supuesta deuda por gastos por rendir. c) En daño moral solicitado, confunde la noción del mismo, reclamando prestaciones propias del daño emergente - gastos médicos: medicamentos y supuesto tratamiento psiquiátrico- a su vez, sin existir nexo causal pretende las demandadas paguen el valor de un supuesto vehículo perdido por el demandante. (infringe razón suficiente e identidad) d) En cuanto al lucro cesante demandado, indica aquél ocurrió luego de terminada la supuesta relación laboral, cuestión no se aviene al concepto de lucro cesante. (infringe razón suficiente, contradicción e identidad) e) Se demanda la supuesta remuneración de Febrero de 2022 de manera íntegra, en circunstancia que indica trabajó únicamente 8 días. (infringe razón suficiente, contradicción e identidad) 3. Por otro lado, no concurre Unidad Económica entre la Universidad Bolivariana, el Instituto Profesional Valle Central y la Universidad de Aconcagua, no tiene controlador común ni ninguno de otros los requisitos para así declararlo, por lo que esta acción deviene en extorsiva respecto de mi parte que ninguna participación tiene en los hechos. No existe subterfugio laboral alguno, no se describe en la demandan ninguna figura que lo tipifique. 4. No adeuda ninguna de las sumas demandas, por lo que expresamente niega su deuda por no existir relación laboral ni civil con el demandante a quien la Universidad Bolivariana le paga sus boletas de honorarios, por las cuales naturalmente, se le retuvo los porcentajes de las mismas y por mandato legal, desde el año 2018 de esa retención se pagó AFP, Salud y Seguro de Accidente. 5. Es claro que la demandante, al no tener una acción plausible y estar caducada la acción del despido injustificado, indebido e improcedente, abultó las sumas demandadas con prestaciones que escapan los baremos indemnizatorios de incluso accidentes del



trabajo o enfermedades profesionales a fin de lograr una mejor posición negociadora, a sabiendas su demanda no tiene mayor asidero.

Invoca la teoría de los actos propios, señalando que resulta contrario a la buena fe y la conducta propia pasada de la actora que después de 4 años de tener una relación civil con la demandada Universidad Bolivariana, de haber entregado sus boletas de honorarios y de haber declarado ante el Servicio de Impuestos Internos una actividad o giro afecto a Impuesto a la Renta y al Global Complementario, pretenda erigirse como trabajador dependiente, para cobrar prestaciones en sede laboral. Como contraprestación por sus servicios a honorarios, el actor extendió las correspondientes boletas de honorarios profesionales. El Art. 7 del Código del Trabajo, estipula que el contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. De la definición referida se extraen los elementos que configuran la relación laboral, siendo el elemento indispensable, el vínculo de subordinación o dependencia. Dicho elemento, según el profesor Palavecino, está compuesto por un doble aspecto: a) desde un punto de vista del empleador, se presenta como una potestad para dirigir la actividad laboral del trabajador, del que derivan las facultades de dirección, organización, fiscalización y disciplina y b) desde el prisma del trabajador se manifiesta como una limitación a su autonomía y a la sujeción a las órdenes, dirección, organización y disciplina del empleador. Como se puede apreciar, no es efectivo que haya existido una relación laboral previa entre el actora y mi mandante, más aun siendo las boletas giradas a la Universidad Bolivariana. Respecto a su parte, el actor no estaba obligado al cumplimiento de ninguna jornada de trabajo, y cabe aplicar en su integridad la denominada Teoría de los Actos Propios, como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema (Corte Suprema 20.12.2006, rol 2.450-05), basada en la noción que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos anteriores que expresan la voluntad del sujeto y definen su posición jurídica en una materia determinada y que se funda, en último término, en el principio más general de la buena fe. Estos



principios tienen plena cabida en el ámbito laboral de que se trata, pues como reiteradamente se ha decidido, la legislación laboral no puede considerarse en forma aislada del ordenamiento jurídico general, que regula las vinculaciones que generan los sujetos del derecho y que, en el caso, se ha traducido en la aceptación por parte del demandante de la existencia de una relación de naturaleza civil con sus respectivas consecuencias, durante los periodos señalados, sin haber formulado reclamo alguno en tal sentido en contra de la demandada Universidad Bolivariana. La Excelentísima Corte, agrega en la misma sentencia “Resulta claro que se ha quebrantado también el artículo 1546 del Código Civil, norma en la cual se establece el principio de la buena fe contractual, la que debe primar en la ejecución de los contratos, por cuanto, nos obstante que la actora definió su posición jurídica en la vinculación con la demanda en los términos señalados, ahora desconoce esa definición, pretendiendo obtener beneficios improcedentes y que derivarían de una relación de naturaleza distinta a la aceptada y fijada por contratantes” Es pertinente destacar que como principio general de Derecho del Trabajo, el principio de la razonabilidad que consiste en la afirmación esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. En la especie, atenta contra la lógica y el principio de razonabilidad que una persona, permanezca durante cuatro años sin reclamar a la demandada esta situación, ni concurrir, durante ese lapso de tiempo, a los organismos laborales competentes demandando el cobro de feriado legal, cotizaciones previsionales y de salud y otros beneficios laborales y previsionales. No es razonable el que haya aceptado estas condiciones contra su voluntad, salvo que el vínculo existente entre las partes corresponda a una prestación de servicios profesionales de honorarios. (En este sentido preciso, Corte de Apelaciones de Concepción, 18 de Octubre de 2007, rol no 146-2007, autos caratulados “Sepúlveda con Megavisión”). Está vedado para demandante, en consideración a su propia conducta pasada, al principio de buena fe contractual y a la razonabilidad que rige en materia laboral, pretender concebir su relación civil de prestación de servicios como un contrato de trabajo. Que nuevamente, la Corte



Suprema ha resuelto que: “Las boletas de honorarios acompañados por la demandada y no objetadas, permiten concluir que el demandante prestó servicios como profesional a honorarios y no es razón de un contrato de trabajo, conclusión que se refuerza por los demás antecedentes que el fallo menciona”. (Sentencia de 20.09.1990, rol 2651. Citado en Boletín Oficial Asociación de Profesionales Dirección del Trabajo, febrero 2001, página, 62). También se ha dicho: “El hecho de que se otorgaran boletas profesionales con periodicidad regular, permite acreditar la existencia de una prestación de servicios, pero no una relación laboral en las partes litigantes”. (Corte de Apelaciones de Santiago 04.11.1987, rol 1700-87) Es por lo expresado, que el demandante emitió boletas de honorarios a la Universidad Bolivariana, reconociendo de esta forma que era una prestadora de servicios y no un trabajador, como intenta demostrar en su libelo. La solicitud de nulidad del despido es controvertida en todas sus partes, no existiendo derecho a pago de cotizaciones previsionales que le permita obtener los beneficios de la “ley bustos”, es decir tener derecho a percibir remuneraciones hasta la supuesta convalidación a que tiene derecho. Finalmente, la ley bustos nació a fin proteger a los trabajadores de lagunas previsionales de empleadores sin escrúpulos que descontaban de las remuneraciones las sumas destinadas a la seguridad social. El caso de autos es totalmente distinto, la demandante pide se extienda a un periodo mayor su relación laboral y lograr beneficios que no le corresponden, en razón a que igualmente, la retención de sus boletas de honorarios, se entera por SII a la AFP y la institución de salud en que cotice el proporcional del honorario devengado, por lo que ninguna laguna previsional se le ha generado a la actora.

Menciona que es improcedente la indemnización por daño moral, debido a la inexistencia de causa y su posterior efecto que pueda justificarla, dada la nula relación causal entre el actuar de mi parte la supuesta afectación de la salud, causar dolor o daño síquico, lo que hace además desproporcionada la solicitud de reparación por la suma de \$26.908.925.- lo único que se pretende con esta solicitud es obtener un enriquecimiento sin causa, lo que está proscrito por la ley.



Cabe hacer presente, que la indemnización de daño moral, no es punitiva, por lo que a todas luces ella es improcedente.

No existe unidad económica. Como ha señalado la I. Corte de Apelaciones de Concepción, RIT Reforma Laboral No 76- 2015, la declaración de empleador común de dos o más empresas de reunir los siguientes requisitos: a) Dirección laboral común; y b) Concurran a su vez otras condiciones, tales como, similitud o complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. Agrega, que "el elemento fundamental es la existencia de una dirección laboral común, el cual no puede faltar, aunque las otras condiciones sean diferentes a las mencionadas a título de ejemplo en la norma en comento". Junto al requisito de la dirección laboral común necesariamente deben concurrir algunas otras de las condiciones enumeradas en el artículo 3 inciso 4° luego de la conjunción copulativa "y" u otras condiciones similares, no bastando solamente con la concurrencia de la dirección laboral común, no obstante ser la existencia fundamental. Lo que demuestra que la dirección laboral común debe siempre estar presente junto a otras condiciones, que no necesariamente son las enumeradas en el artículo 3 inciso 4° del Código del Trabajo. Es así, como se está ante la presencia de requisitos que deben concurrir en forma copulativa, por lo que si falta uno de ellos o ambos no podrá determinarse que dos o más empresas son un solo empleador. En la especie como ya se indicó no existe ni dirección laboral común ni ninguno de los otros elementos, como quedará asentado en autos. Además de los requisitos los indicados, se requiere que exista un perjuicio a los trabajadores mediante un subterfugio, lo que en este caso, ni en ningún otro ha ocurrido, ni menos explica el demandante cuales serían estos perjuicios. La única relación que su parte reconoce, es que entre ambas demandadas existió un convenio universitario de colaboración recíproca. La petición de Unidad Económica en estos autos persigue como único fin presionar a su parte, siendo extorsiva y un abuso del derecho, proscrito en el Código del Trabajo en el art. 430. La demandante no ha solicitado la declaración de solidaridad sino sean obligadas al pago las partes simplemente



conjunta, por lo que no podría ser condenada a las prestaciones de manera solidaria, aun estando solicitada la declaración de Unidad Económica, puesto al demandar de esta manera ha renunciado expresamente a la solidaridad de conformidad a los art. 1511 y siguientes del Código Civil.

Por lo expuesto y en mérito de lo relatado y conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y siguientes, 452 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas pertinentes, Pide tener por opuesta la excepción de caducidad y acogerla con costas y por contestada la rechazándola en todas sus partes, con costas.

**CUARTO:** Que en representación de **SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A.**, comparece don SKANDAR HAZBÚN REZUC, ingeniero, ambos domiciliados en calle Eleodoro Yáñez 1032, Providencia, Región Metropolitana, sostenedora legal del Instituto Valle Central, quien expone que opone excepción caducidad de la acción de despido injustificado, señalando que sin importar reconocimiento de ninguna especie relación laboral que indica el demandante existió entre las partes, niega su existencia.

Pode se declaren caducas las prestaciones demandadas relativas a los años de servicios e indemnización sustitutiva del aviso previo. La demandante indica que habría sido supuestamente despedido el día 3 de Febrero de 2022. La demanda fue ingresada el día 11 de Julio de 2022. La demandante no acompañó a la demanda reclamo ante la Inspección del Trabajo, y su parte no ha recibido notificación alguna de reclamo administrativo, por lo que el plazo de caducidad de la acción de despido injustificado, indebido o improcedente, no se ha suspendido. La ley prevé en inciso primero del art. 168 del Código del Trabajo, que el plazo para ejercer la acción de despido injustificado indebido o improcedente será de 60 días hábiles desde contados desde la separación del trabajador. De esta manera, el plazo para presentar la acción de despido injustificado, indebido o improcedente caducó el día 14 de Abril de 2022, que por mandato legal, es la única forma, fuera de la causal necesidades de la empresa del art 161 inciso primero, que permite el cobro de la indemnización por años de servicios y sustitutiva del aviso previo que



fueron solicitados en la demanda. Por lo tanto pide se declare caduca la acción en los términos señalados de conformidad a los artículos 168, 452 y siguientes del Código del Trabajo, con costas.

En subsidio contesta la demanda señalando que todos los hechos expuestos en la demanda, son falsos e imprecisos, teniendo que acreditarlos la contraria de conformidad a lo establecido en el art. 1698 del Código Civil.

Controvierte circunstanciadamente lo siguiente: 1. Se niega la existencia de relación laboral con el demandante, mi parte no contrató al demandante ni civil, ni laboralmente, jamás cumplió horarios, no firmó asistencia, no curso solicitud de vacaciones, ni tuvo supervisión de personal de su dependencia. La única relación que existe con las otras co demandadas fue un convenio de ayuda recíproca (común en instituciones de educación superior) hoy no vigente entre la Universidad Bolivariana y su representada. 2. Que en mérito de lo anterior, no nos consta ninguno de los hechos que relata en la demanda, ni las prestaciones demandadas. Con todo, la demanda adolece de serias faltas a la lógica jurídica, en especial principios de identidad, contradicción y razón suficiente, al que no solo las sentencias son obligatorios seguir, puesto toda presentación de hecha a un tribunal debe tener un contenido reproducible por la razón, sino ella quedaría sin causa a pedir. Esto se ve manifestada en lo siguiente: a) No se indica que periodo se demandan de feriado legal y proporcional, indica 15 días por cada concepto. Con ello se infringe además el debido proceso en razón a indicar la demanda se mantendría una relación laboral desde el año 2018, podría indicar se adeuda por cualquiera de los cuatro años., no pudiendo mi parte oponer la respectiva excepción de prescripción (infringe razón suficiente e identidad) b) No precisa a que periodo corresponde la supuesta deuda por gastos por rendir. Con ello se infringe, nuevamente el debido proceso en razón a indicar la demanda se mantendría una relación laboral desde el año 2018, podría indicar se adeuda por cualquiera de los cuatro años, no pudiendo mi parte oponer la respectiva excepción de prescripción (infringe razón suficiente e identidad) c) En daño moral



solicitado, confunde la noción del mismo, reclamando prestaciones propias del daño emergente - gastos médicos: medicamentos y supuesto tratamiento psiquiátrico- a su vez, sin existir nexo causal pretende las demandadas paguen el valor de un supuesto vehículo perdido por el demandante. (infringe razón suficiente e identidad) d) En cuanto al lucro cesante demandado, indica aquél ocurrió luego de terminada la supuesta relación laboral, cuestión no se aviene al concepto de lucro cesante. (infringe razón suficiente, contradicción e identidad) e) Se demanda la supuesta remuneración de Febrero de 2022 de manera íntegra, en circunstancia que indica trabajó únicamente 8 días. (infringe razón suficiente, contradicción e identidad) 3. Por otro lado, no concurre Unidad Económica entre la Universidad Bolivariana, el Instituto Profesional Valle Central y la Universidad de Aconcagua, no tiene controlador común ni ninguno de otros los requisitos para así declararlo, por lo que esta acción deviene en extorsiva respecto de mi parte que ninguna participación tiene en los hechos. No existe subterfugio laboral alguno, no se describe en la demandan ninguna figura que lo tipifique. 4. No adeuda ninguna de las sumas demandas, por lo que expresamente niega su deuda por no existir relación laboral ni civil con el demandante a quien la Universidad Bolivariana le paga sus boletas de honorarios, por las cuales naturalmente, se le retuvo los porcentajes de las mismas y por mandato legal, desde el año 2018 de esa retención se pagó AFP, Salud y Seguro de Accidente. En razón de no tener una acción plausible contra mi parte y estar caducada la acción del despido injustificado, indebido e improcedente, abultó las sumas demandadas con prestaciones que escapan los baremos indemnizatorios de incluso accidentes del trabajo o enfermedades profesionales a fin lograr una mejor posición negociadora, a sabiendas que su demanda no tiene mayor asidero.

Invoca la teoría de los actos propios, señalando que resulta contrario a la buena fe y la conducta propia pasada de la actora que después de 4 años de tener una relación civil con la demandada Universidad Bolivariana, de haber entregado sus boletas de honorarios y de haber declarado ante el Servicio de Impuestos Internos una actividad o giro afecto a Impuesto a la Renta y al Global Complementario,



pretenda erigirse como trabajador dependiente, para cobrar prestaciones en sede laboral. Como contraprestación por sus servicios a honorarios, el actor extendió las correspondientes boletas de honorarios profesionales. El Art. 7 del Código del Trabajo, estipula que el contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. De la definición referida se extraen los elementos que configuran la relación laboral, siendo el elemento indispensable, el vínculo de subordinación o dependencia. Dicho elemento, según el profesor Palavecino, está compuesto por un doble aspecto: a) desde un punto de vista del empleador, se presenta como una potestad para dirigir la actividad laboral del trabajador, del que derivan las facultades de dirección, organización, fiscalización y disciplina y b) desde el prisma del trabajador se manifiesta como una limitación a su autonomía y a la sujeción a las órdenes, dirección, organización y disciplina del empleador. Como se puede apreciar, no es efectivo que haya existido una relación laboral previa entre el actora y mi mandante, más aun siendo las boletas giradas a la Universidad Bolivariana. Respecto a su parte, el actor no estaba obligado al cumplimiento de ninguna jornada de trabajo, y cabe aplicar en su integridad la denominada Teoría de los Actos Propios, como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema (Corte Suprema 20.12.2006, rol 2.450-05), basada en la noción que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos anteriores que expresan la voluntad del sujeto y definen su posición jurídica en una materia determinada y que se funda, en último término, en el principio más general de la buena fe. Estos principios tienen plena cabida en el ámbito laboral de que se trata, pues como reiteradamente se ha decidido, la legislación laboral no puede considerarse en forma aislada del ordenamiento jurídico general, que regula las vinculaciones que generan los sujetos del derecho y que, en el caso, se ha traducido en la aceptación por parte del demandante de la existencia de una relación de naturaleza civil con sus respectivas consecuencias, durante los periodos señalados, sin haber formulado reclamo alguno en tal sentido en contra de la



demandada Universidad Bolivariana. La Excelentísima Corte, agrega en la misma sentencia “Resulta claro que se ha quebrantado también el artículo 1546 del Código Civil, norma en la cual se establece el principio de la buena fe contractual, la que debe primar en la ejecución de los contratos, por cuanto, nos obstante que la actora definió su posición jurídica en la vinculación con la demanda en los términos señalados, ahora desconoce esa definición, pretendiendo obtener beneficios improcedentes y que derivarían de una relación de naturaleza distinta a la aceptada y fijada por contratantes” Es pertinente destacar que como principio general de Derecho del Trabajo, el principio de la razonabilidad que consiste en la afirmación esencial de que el ser humano, es sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. En la especie, atenta contra la lógica y el principio de razonabilidad que una persona, permanezca durante cuatro años sin reclamar a la demandada esta situación, ni concurrir, durante ese lapso de tiempo, a los organismos laborales competentes demandando el cobro de feriado legal, cotizaciones previsionales y de salud y otros beneficios laborales y previsionales. No es razonable el que haya aceptado estas condiciones contra su voluntad, salvo que el vínculo existente entre las partes corresponda a una prestación de servicios profesionales de honorarios. (En este sentido preciso, Corte de Apelaciones de Concepción, 18 de Octubre de 2007, rol no 146-2007, autos caratulados “Sepúlveda con Megavisión”). Está vedado para demandante, en consideración a su propia conducta pasada, al principio de buena fe contractual y a la razonabilidad que rige en materia laboral, pretender concebir su relación civil de prestación de servicios como un contrato de trabajo. Que nuevamente, la Corte Suprema ha resuelto que: “Las boletas de honorarios acompañados por la demandada y no objetadas, permiten concluir que el demandante prestó servicios como profesional a honorarios y no es razón de un contrato de trabajo, conclusión que se refuerza por los demás antecedentes que el fallo menciona”. (Sentencia de 20.09.1990, rol 2651. Citado en Boletín Oficial Asociación de Profesionales Dirección del Trabajo, febrero 2001, página, 62). También se ha dicho: “El hecho de que se otorgaran boletas profesionales con periodicidad regular, permite



acreditar la existencia de una prestación de servicios, pero no una relación laboral en las partes litigantes”. (Corte de Apelaciones de Santiago 04.11.1987, rol 1700-87) Es por lo expresado, que el demandante emitió boletas de honorarios a la Universidad Bolivariana, reconociendo de esta forma que era una prestadora de servicios y no un trabajador, como intenta demostrar en su libelo. La solicitud de nulidad del despido es controvertida en todas sus partes, no existiendo derecho a pago de cotizaciones previsionales que le permita obtener los beneficios de la “ley bustos”, es decir tener derecho a percibir remuneraciones hasta la supuesta convalidación a que tiene derecho. Finalmente, la ley bustos nació a fin proteger a los trabajadores de lagunas previsionales de empleadores sin escrúpulos que descontaban de las remuneraciones las sumas destinadas a la seguridad social. El caso de autos es totalmente distinto, la demandante pide se extienda a un periodo mayor su relación laboral y lograr beneficios que no le corresponden, en razón a que igualmente, la retención de sus boletas de honorarios, se entera por SII a la AFP y la institución de salud en que cotice el proporcional del honorario devengado, por lo que ninguna laguna previsional se le ha generado a la actora.

Menciona que es improcedente la indemnización por daño moral, debido a la inexistencia de causa y su posterior efecto que pueda justificarla, dada la nula relación causal entre el actuar de mi parte la supuesta afectación de la salud, causar dolor o daño síquico, lo que hace además desproporcionada la solicitud de reparación por la suma de \$26.908.925.- lo único que se pretende con esta solicitud es obtener un enriquecimiento sin causa, lo que está proscrito por la ley. Cabe hacer presente, que la indemnización de daño moral, no es punitiva, por lo que a todas luces ella es improcedente.

No existe unidad económica. Como ha señalado la I. Corte de Apelaciones de Concepción, RIT Reforma Laboral No 76- 2015, la declaración de empleador común de dos o más empresas de reunir los siguientes requisitos: a) Dirección laboral común; y b) Concurran a su vez otras condiciones, tales como, similitud o complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la



existencia entre ellas de un controlador común. Agrega, que "el elemento fundamental es la existencia de una dirección laboral común, el cual no puede faltar, aunque las otras condiciones sean diferentes a las mencionadas a título de ejemplo en la norma en comento". Junto al requisito de la dirección laboral común necesariamente deben concurrir algunas otras de las condiciones enumeradas en el artículo 3 inciso 4° luego de la conjunción copulativa "y" u otras condiciones similares, no bastando solamente con la concurrencia de la dirección laboral común, no obstante ser la existencia fundamental. Lo que demuestra que la dirección laboral común debe siempre estar presente junto a otras condiciones, que no necesariamente son las enumeradas en el artículo 3 inciso 4° del Código del Trabajo. Es así, como se está ante la presencia de requisitos que deben concurrir en forma copulativa, por lo que si falta uno de ellos o ambos no podrá determinarse que dos o más empresas son un solo empleador. En la especie como ya se indicó no existe ni dirección laboral común ni ninguno de los otros elementos, como quedará asentado en autos. Además de los requisitos los indicados, se requiere que exista un perjuicio a los trabajadores mediante un subterfugio, lo que en este caso, ni en ningún otro ha ocurrido, ni menos explica el demandante cuales serían estos perjuicios. La única relación que su parte reconoce, es que entre ambas demandadas existió un convenio universitario de colaboración recíproca. La petición de Unidad Económica en estos autos persigue como único fin presionar a su parte, siendo extorsiva y un abuso del derecho, proscrito en el Código del Trabajo en el art. 430. La demandante no ha solicitado la declaración de solidaridad sino sean obligadas al pago las partes simplemente conjunta, por lo que no podría ser condenada a las prestaciones de manera solidaria, aun estando solicitada la declaración de Unidad Económica, puesto al demandar de esta manera ha renunciado expresamente a la solidaridad de conformidad a los art. 1511 y siguientes del Código Civil.

Por lo expuesto y en mérito de lo relatado y conforme a lo dispuesto en los arts. 7 y siguientes, 452 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas



pertinentes, Pide tener por opuesta la excepción de caducidad y acogerla con costas y por contestada la rechazándola en todas sus partes, con costas.

**QUINTO:** Que llamadas las partes a conciliación no se produjo, estableciéndose como **HECHOS CONTROVERTIDOS:** 1. Existencia de la relación laboral entre la demandante y las demandadas. Fecha de inicio y condiciones bajo las que se pactó y ejecutó. 2. Efectividad que el demandante fue despedido con fecha 03 de febrero del año 2022. Circunstancias que rodean el hecho, comunicaciones dadas con dicho fin 3. Situación el feriado legal y proporcional demandado. En caso de haber sido utilizado, época de su uso o en su defecto montos a compensar. 4. Efectividad que el demandante era acreedor de aguinaldo. Efectividad que se adeude el mismo. 5. Efectividad que el demandante incurrió en gastos en favor del empleador y que no han sido reembolsados, montos de los mismos. 6. Perjuicios sufridos por el demandante con motivo de las negociaciones por término de contrato y no pago de las remuneraciones. Naturaleza y cuantía de los mismos. 7. Prestación de servicios por parte del demandante efectivos, entre octubre del 2021 y febrero del 2022. En la afirmativa, estado de pago de dichos servicios o remuneraciones. 8. Existencia de finiquitos o transacciones celebradas entre el demandante y las demandadas. Contenido de los mismos y estipulaciones o declaraciones. 9. En la afirmativa del punto anterior, condiciones bajo las cuales dichos instrumentos fueron suscritos por el demandante. Efectividad que existió fuerza o apremio para su suscripción 10. Vínculos existentes entre las demandadas. Efectividad que ellas constituyen un empleador común en los términos del artículo 3° del Código del Trabajo. Dirección laboral común. 11. Situación de las cotizaciones provisionales del demandante al término de los servicios para las demandadas. En caso de estar pagadas, época del pago, montos involucrados e identidad del pagador. 12. En la afirmativa de la existencia de empleador común, efectividad que dicha forma de organización empresarial tenía por objeto o causo como resultado, perjuicios laborales y o previsionales para el demandante.



**SEXTO:** Que para comprobar su acción la parte demandante incorporó los siguientes medios de prueba:

**Documental:** 1. Contrato de prestación de servicios a honorarios entre Corporación Universidad Bolivariana y Francisco Javier Cristi Cortes, de fecha 2 de febrero de 2018. 2. Informe anual de boletas de honorarios electrónica del Servicio de Impuestos Internos del año 2018 Francisco Javier Cristi Cortes y boletas sucesivas entre los N°s 3 y 14, todas del año 2018. 3. Informe anual de boletas de honorarios electrónica del Servicio de Impuestos Internos del año 2019 Francisco Javier Cristi Cortes y boletas sucesivas entre los N°s 15 y 27, con exclusión de la N° 24, todas del año 2019. 4. Informe anual de boletas de honorarios electrónica del Servicio de Impuestos Internos del año 2020 Francisco Javier Cristi Cortes y boletas sucesivas entre los N°s 28 y 39, todas del año 2020. 5. Informe anual de boletas de honorarios electrónica del Servicio de Impuestos Internos del año 2021 Francisco Javier Cristi Cortes y boletas sucesivas entre los N°s 40 y 50, todas del año 2021. 6. Informe anual de boletas de honorarios electrónica del Servicio de Impuestos Internos del año 2022 Francisco Javier Cristi Cortes y boletas sucesivas entre los N°s 51 y 52, todas del año 2022. 7. Transacción, renuncia y finiquito entre Corporación Universidad Bolivariana y Francisco Javier Cristi Cortes, de fecha 15 de julio de 2019. 8. Transacción, renuncia y finiquito entre Corporación Universidad Bolivariana y Francisco Javier Cristi Cortes, de fecha 19 de noviembre de 2019. 9. Certificado de Cotizaciones Previsionales de AFP Capital de Francisco Javier Alberto Cristi, de fecha 22 de junio de 2022. 10. Cinco certificados de Certificados de Cotizaciones Previsionales Acreditadas de Cuenta Individual por Cesantía de Francisco Javier Alberto Cristi desde el año 2017 al 2022. 11. Organigrama Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información de Universidad de Aconcagua; Universidad Bolivariana e Instituto Valle Central. 12. Certificado de fecha 19 de agosto de 2022, emitido por el Notario Iván Torrealba Acevedo, relativo a conversaciones de Whatsapp, desde el dispositivo móvil marca HUAWEI cuyo IMEI es el 866140041047470, MODELO: DUB-LX3. 13. Perfil de Whatsapp de” Daniel

González F.”, teléfono +56 9 7767 4989 y 39 páginas de captura de pantallas relativas a conversaciones de Whatsapp. 14. Perfil de Whatsapp de “Edo Ulloa”, teléfono +56 9 82091467 y 57 páginas de captura de pantallas relativas a conversaciones de Whatsapp. 15. Perfil de Whatsapp de “Pablo Mutizabal”, teléfono +56 9 6616 6221 y 22 páginas de captura de pantallas relativas a conversaciones de Whatsapp. 16. Acta Reunión Comité Sistemas 08/10/2019, entre Horacio Ríos D., Rector; Eduardo Ulloa N., Vicerrector AF y Fco. Javier Cristi C., Director Nacional de informática. 17. Acta Reunión Comité Sistemas 10/09/2019. 18. Acta Reunión Comité Sistemas 29/10/2019. 19. Acta Reunión Comité Sistemas 26/10/2019. 20. Acta Reunión Comité Sistemas 05/11/2019. 21. Tabla Reunión Comité Sistemas 21/01/2020. 22. Acta Reunión Comité Sistemas 14/01/2020, con asistencia de Horacio Ríos, Rector; Eduardo Ulloa, Vicerrector DAF, Fco J. Cristi, Director Informática y John Riversa, Desarrollador. 23. Rol Único Tributario de Servicio de Impuestos Internos de la Universidad Bolivariana, Rut 71.477.600-2, Usuario de la cédula: Francisco Javier Alberto Cristi Cortes. 24. Formulario firmado por don Francisco Cristi Cortes, para autorizar 7:00 horas extras a Daniel González Farías. 25. Cadena de correos electrónicos entre Francisco Cristi Cortes e Ingrid Ramírez, con copia a Cristian.millan@uac.cl y Eduardo.ulloa@ubolivariana.cl, con el asunto “Sobretiempo personal de informática” de fecha 9 de abril de 2021. 26. Solicitud de permiso por ausencia de Daniel González Farías. 27. Certificación laboral firmada por Francisco Cristi Cortes, con fecha 19 de marzo de 2021. 28. Cadena de correos electrónicos entre Francisco Cristi Cortes, Ingrid Ramírez, con copia a Eduardo Ulloa el 23 de febrero de 2021 y 3 de marzo de 2021, con asunto “SOLICITA ANEXO CONTRATO SR MAYKER MUÑOZ” y documento adjunto, anexo contrato individual. 29. Correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2021, entre Marcela Tiznado, Pablo Mutizabal y Francisco Cristi, con copia Horacio Ríos, con el asunto “Reunión TI”. 30. Correo electrónico de fecha 16 de junio de 2021, enviado por Ángel Ciro Mavares Torres a Francisco Cristi, con el asunto “Agreement Licencias Univ Aconcagua”. 31. Cadena de correos electrónicos, entre el 6 de mayo de 2021 y 10 de junio de

2021, entre Francisco Cristi Cortes, Eduardo Ulloa y Marcela Tiznado, con el asunto "Cotizar Dispositivos y Beca Tecnológica". 32. Cadena de correos electrónicos, entre el 30 de noviembre de 2021 y 01 de diciembre de 2021, entre Eduardo Ulloa, John Rivera, Francisco Cristi Cortés y Marcela Tiznado López, con el asunto "Licencias UAC". 33. Cadena de correos electrónicos de fecha 12 de octubre de 2021, entre Ernesto Mota Tabares, Francisco Cristi Cortés y Arienhani Pereira, con el asunto "Consulta factura recibida". 34. Cadena de correos electrónicos, entre el 29 de junio de 2021 y 05 de agosto de 2021, Francisco Cristi Cortes, Eduardo Ulloa y Marcela Tiznado, con el asunto "Consulta originales". 35. Cadena de correos electrónicos de fecha 8 de octubre de 2021, entre Eduardo Ulloa y Francisco Cristi Cortés, Jaime Núñez con el asunto "Notas de Crédito". 36. Cadena de correos electrónicos entre el 15 de julio de 2021 y 01 de octubre de 2021, entre Eduardo Ulloa y Francisco Cristi Cortés y otro, con el asunto "Renovación contrato" y documento adjunto. 37. Cadena de correos electrónicos entre el 8 de julio de 2021 y 22 de noviembre de 2021, entre Francisco Plaza González, Carlos Mena, Juan Carlos González, entre otros, con el asunto "UACONCAGUA OTT 72002828828 INST. MPLS 50 Mbps // ott 72102873183 Inst. SWITCH// VITACURA". 38. Cadena de correos electrónicos entre el 25 de noviembre de 2021 y 02 de diciembre de 2021, entre Eduardo Ulloa, Francisco Cristi, con copia a John Rivera, con el asunto "Reemplaza al anterior correo RV: Reporte MNP UAC". 39. Cadena de correos electrónicos entre el 30 de noviembre de 2021 y 03 de diciembre de 2021, entre Eduardo Ulloa, Francisco Cristi, John Rivera, con copia a Marcela Tiznado con el asunto "Universidad de Aconcagua – Notificación licencias". 40. Acta de reunión de fecha 04 de junio de 2021, de la institución UAC, proyecto: Tablero de Control de Mando. 41. Cotización de Entel Corp, de fecha 30 de octubre de 2020, dirigida a Francisco Cristi Cortes, Universidad de Aconcagua. 42. Cotización de Entel Corp., de fecha 16 de octubre de 2020, dirigida a Francisco Cristi Cortes, Universidad de Aconcagua. 43. Acta reunión Bettersoft - UAC de fecha 20 de mayo de 2021. 44. Propuesta comercial de Claro, internet dedicado de fecha 16 de junio de 2021. 45. Cotización de



Infocorp dirigida a Francisco Cristi, de fecha 20 de mayo de 2020. 46. Cadenas de correos electrónicos entre el 14 de diciembre de 2021 y 15 de diciembre de 2021, entre John Rivera; Eduardo Ulloa, Marcela Tiznado y otros, con el asunto “Presentación Solución”. 47. Carta de Softland dirigida a Universidad de Aconcagua, con atención a Francisco Cristi, de Octubre de 2021. 48. Permiso Único Colectivo (Estado de Catástrofe COVID-19) en favor de Francisco Javier Cristi Cortes, de la empresa Universidad Bolivariana, emitido el 18 de marzo de 2020. 49. Permiso Único Colectivo (Estado de Catástrofe COVID-19) en favor de Francisco Javier Cristi Cortes, de la empresa Universidad Bolivariana, emitido el 12 de junio de 2020. 50. Salvoconducto Colectivo (Estado de Catástrofe COVID-19) en favor de Francisco Javier Cristi Cortes, de la empresa Universidad Bolivariana, emitido el 11 de junio de 2020. 51. Cadena de correos electrónicos entre el 27 de mayo de 2021 y 27 de mayo de 2021, entre Francisco Cristi Cortes y Denise Goldener, con el asunto “Adjunta contrato UBolivariana”. 52. Cadena de correos electrónicos entre el 12 de noviembre de 2020 y 18 de noviembre de 2020, entre Alex Vara y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “servicio correo bajo office365” 53. Cadena de correos electrónicos entre el 30 de diciembre de 2020 y 12 de enero de 2021, entre Hans Christian Donders Molina, Jessica Marlene De La Rivera Fuentes, con copia a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “confirmo”. 54. Cadena de correos electrónicos entre el 18 de julio de 2018 y 07 de agosto de 2018, entre Carolina Chávez Fernández y Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Pendientes”. 55. Cadena de correos electrónicos entre el 26 de enero de 2018 y 18 de julio de 2018, entre Carolina Chávez Fernández y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Oferta comercial grupo electrógeno”. 56. Correo electrónico de fecha 25 de junio de 2018 enviado por Francisco Cristi Cortes a Juan Marcelo Sepúlveda Berrade, Daniel González Faría y otros, con el asunto “acta de entrega”. 57. Cadena de correos electrónicos entre el 11 de junio de 2018 y 18 de julio de 2018, entre Carolina Chávez Fernández y Francisco Cristi Cortes, con copia a Skandar Hazbún y otro, con el asunto “Extensión LAN La Serena”. 58. Correo electrónico de fecha 11 de junio de 2018 enviado por



Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández, con copia a Skandar Hazbun y otro, con el asunto “CAMBIO CPN SEDE CENTRAL”. 59. Correo electrónico de fecha 11 de junio de 2018 enviado por Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández, con copia a Skandar Hazbun y otros, con el asunto “TRASLADO LINARES”. QHBRXEHPQWX 1 Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ° 60. Correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2018 enviado por Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández, con el asunto “Complementa información”. 61. Correo electrónico de fecha 3 de septiembre de 2018 enviado por Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández, con el asunto “Información adicional”. 62. Correo electrónico de fecha 5 de septiembre de 2018 enviado por Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández, con copia a Héctor Valencia y otro, con el asunto “URGENTE: Continuidad licencia FIREWALL”. 63. Correo electrónico de fecha 18 de julio de 2018 enviado por Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández, con el asunto “PENDIENTES”. 64. Cadena de correos electrónicos entre el 31 de agosto de 2018 y el 6 de septiembre de 2018 entre Francisco Cristi Cortes y Luis Cáceres Mackenney, con copia a Danilo Núñez Pavéz, con el asunto “Agrega información”. 65. Correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2018, enviado por Héctor Valencia a Francisco Cristi Cortes, con copia a Munir Hazbún y Skandar Hazbún, sin asunto. 66. Correo electrónico enviado el 13 de septiembre de 2021 por Francisco Cristi Cortes a Omar Barrios Serrano con copia a Gerardo Figueroa, con el asunto “Comunicación Urgente”. 67. Cadena de correos electrónicos entre el 15 de noviembre de 2018 y el 6 de septiembre de 2018 entre Francisco Cristi Cortes, Karla Danna Espinoza Pino y Daniel González Faría, con el asunto “Consulta”. 68. Invitación a reunión de Microsoft Teams, de fecha 25 de enero de 2021, organizado por María José Jullian Middleton, con el asunto “Informa futuro de la Universidad Bolivariana”. 69. Correo electrónico de ayuda@manager.cl a Francisco Cristi Cortes, de fecha 01 de julio de 2019, con el asunto “Se ha recibido su Ticket - SOLICITAMOS CLAVE - #190701- 00170]. 70. Acta de servicio de Movistar de fecha 12.04.2018. 71. Propuesta de ADELACU dirigida a Francisco



Javier Cristi, Director Nacional de Informática, de fecha 27 de noviembre de 2019.

72. Acta de entrega de fecha 15 de marzo de 2019, firmada por Francisco Cristi, Director Nacional de Informática. 73. Acuerdos Reunión de coordinación Proyecto Moodle de fecha 03/12/2019. 74. Carta de fecha 28 de enero de 2020 firmada por Francisco Cristi Cortes, Director Nacional Departamento Informática. 75. Cadena de correos electrónicos entre el 11 de enero de 2019 y el 14 de enero de 2019 entre Francisco Cristi Cortes, German Toledo, con copia a Skandar Hazbún y otros, con el asunto “Características de las VM actuales”. 76. Correo electrónico de fecha 12 de junio de 2019, entre Paz Lorca y Francisco Cristi Cortes, con copia a Gonzalo Maldonado Soto, con el asunto “Registro consumo de luz sede Santiago”. 77. Oferta comercial para servicio complementario 800 de Telefónica Empresas Chile S.A. para la Universidad Bolivariana, con atención a Francisco Cristi Cortes, de fecha 15 de octubre de 2019. 78. Correo electrónico de fecha 25 de febrero de 2021 de John Rivera González a Francisco Cristi Cortes, con copia a Eduardo Ulloa y otros, con el asunto “Integración de accesos mediante cuenta de correo”. 79. Cadena de correos electrónicos entre el 4 de enero de 2019 y 12 de febrero de 2019, entre Francisco Cristi Cortes, Ximena Jara, con copia a Eduardo Ulloa, con el asunto “LICENCIAMIENTO MICROSOFT”. 80. Correo electrónico de fecha 8 d marzo de 2019 de Daniel González Farías a Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Pendiente Soporte Viernes 8”. 81. Correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2019 de John Rivera González a Francisco Cristi Cortes, con copia a Daniel González Farías y otros, con el asunto “logs de servidores”. 82. Correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2019 enviado por Francisco Cristi Cortes a Edgar Caro, con copia a Isabel Corbera, con el asunto “Acuerdo reunión Bettersoft”. 83. Cadena de correo de fecha 15 de enero de 2019 entre Francisco Cristi Cortes, Edgar Carim Eduardo Riady Hazbún y otros, con el asunto “Reasigna funciones que tenía L.Luces”. 84. Cadena de correo entre el 1 de diciembre de 2021 y 6 de diciembre de 2021 entre Francisco Cristi Cortes, Marcelo Baeza Araya y otros, con el asunto “RENOVACIÓN CONTRATO MANAGER”. 85. Cadena de correo entre el 24 de febrero de 2021 y 25 de febrero de 2021 entre



Francisco Cristi Cortes, Simón Erasmo Segura Báez y otros, con el asunto “[EXTERNO] Requerimiento telefonía celular Datos jefa de ejecutiva móvil”. 86. Cadena de correo entre el 8 de mayo de 2018 y 14 de mayo de 2018 entre Francisco Cristi Cortes, Marcelo Baeza y otros “Revisar Migración de datos Maule y Univ Bolivariana”. 87. Correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2019 enviado por Francisco Cristi Cortes a Simon.gudinonelcomchile.cl y otros con el asunto “TRASLADO SEDE CENTRAL”. 88. Cadena de correos electrónicos entre el 2 de diciembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019 entre Daniel Acevedo, Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Servicios caudales Telecom”. 89. Correo electrónico de fecha 14 de junio de 2018 de Francisco Cristi Cortes a Hugo Valenzuela y otros, con el asunto “Descripción plataforma actual”. 90. Cadena de correos electrónicos entre el 11 de septiembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019 entre Francisco Cristi Cortes, Francesca Solari Poblete y otros, con el asunto “SOLICITUD INTERVENCIÓN EN EL CORE DE COMUNICACIONES”. 91. Correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2019, enviado por Sandra Guerrero a Francisco Cristi Cortes con el asunto “Temas pendientes web UB”. 92. Cadena de correos electrónicos entre las fecha 9 de abril de 2018 a 12 de abril de 2018, entre Francisco Cristi Cortes y José Manuel Aravire y otros, con el asunto “URGENTE: Equipamiento informático en las sedes”. 93. Cadena de correos electrónicos entre las fechas 3 de abril de 2019 a 30 de abril de 2019, entre Hugo Valenzuela y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “URGENTE: Equip video conferencia para acreditación”. 94. Correo electrónico entre Eduardo Ulloa y otros y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “URGENTE: Procesos en fin de semana”. 95. Correo electrónico de fecha 9 de abril de 2018 entre Isabel Soto Arancibia y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Direcciones de sedes”. 96. Nueve páginas de apuntes a manos del señor Francisco Cristi Cortes, entre el 03 de marzo de 2021 y el 24 de mayo de 2021. 97. Factura electrónica N° 101345 de fecha 8 de abril de 2019 de Infocorp, dirigida a Universidad Bolivariana, contacto Francisco Cristi. 98. Cotización de Infocorp de fecha 10 de enero de 2019, dirigida a Francisco Cristi. 99. Memorándum de fecha 02 de abril de 2018 dirigido a Francisco Cristi, Director



de Informática, con el asunto “Envía requerimientos de Hardware instalación Horizonte”. 100. Memorándum interno de fecha 3 de septiembre de 2020, emitido por Francisco Javier Cristi Cortes, Director Nacional de Informática. 101. Minuta de reunión “Proyecto migración desde San Martín a Paine” de fecha 4 de enero de 2021, para el cliente Universidad Bolivariana, asistentes Francisco Cristi Cortes y otros. 102. Cadena de correos entre las fechas 16 de febrero de 2021 a 23 de febrero de 2021, entre Oriana Ortega y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Computadores Calama”. 103. Cadena de correos entre el 13 de octubre de 2020 a 22 de octubre de 2020, entre Bruno Aranda Rojas a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Creación de correos UAC para contact”. 104. Correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2021 de Laleschka Flores Gómez a Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Factura Softland”. 105. Cadena de correos electrónicos de fechas 22 de septiembre de 2020 a 13 de mayo de 2021, entre Marcela Tiznado López a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Impresoras UAC”. 106. Cadena de correos electrónicos de fecha 17 de febrero de 2021 a 23 de febrero de 2021, entre Mariela López Hernández a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Lista distribución cartolas Servipag UB-IPVC”. 107. Cadena de correos electrónicos de fechas 14 de diciembre de 2021 a 15 de diciembre de 2021, entre Omar Barrios Serrano a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto: “Presentación solución”. 108. Cadena de correos electrónicos de fechas 8 de marzo de 2021 a 9 de marzo de 2021, entre Marcela Tiznado López a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Reunión en sede 18 TI”. 109. Cadena de correos electrónicos de fecha 8 de junio de 2021 a 14 de junio de 2021, entre Francisco Cristi Cortes y Germán Valenzuela Morales, con el asunto “Visación contrato MNP Bettersoft-UAconcagua”. 110. Cadena de correos electrónicos de fecha 22 de septiembre de 2020<sup>a</sup> 17 de mayo de 2021, entre Marcela Tiznado López y Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Contratos individuales impresoras”. 111. Reunión comité sistemas de fecha 03 de junio de 2020. 112. Reunión comité sistemas de fecha 20 de mayo de 2020. 113. Reunión comité sistemas de fecha 27 de mayo de 2020. 114. Tabla reunión comité



sistemas de fecha 15 de mayo de 2020. 115. Acta de entrega de alargador de fecha 15 de marzo de 2019 firmada por Francisco Cristi Cortes y Lucy Kunstmann, Vicerrectora Valle Central. 116. Factura de Infocorp Chile SPA N° 102312 de fecha 27 de marzo de 2020 dirigida a Sociedad Educacional del Maule S.A., contacto Francisco Cristi. 117. Cadena de correos de fecha 29 de septiembre de 2017 a 26 de febrero de 2018 entre René Baeza Vidal a Francisco Cristi Cortes con el asunto “Escalamiento ante fallas más propuesta red MPLS”. 118. Correo electrónico de fecha 22 de enero de 2018, de Carolina Chávez Fernández a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Aseguramiento de facturación 201703214-comunicaciones del sur S.A.” 119. Correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2019 de Alex Salamanca a Jhon Rivera González y otros, con el asunto “Avance proyecto registro de depósitos de recaudación diaria U+”. 120. Correo electrónico de fecha 12 de abril de 2018 entre Francisco Núñez Villa a Francisco Cristi Cortes y otro, con el asunto “Equipamiento sede Chillán”. 121. Correos electrónicos de fechas 20 de agosto de 2018 y 22 de agosto de 2018 entre Francisco San Martín y Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Detalles de trabajos”. 122. Correo electrónico de fecha 22 de julio de 2019, entre Gastón Sáez a Francisco Cristi Cortes y otros con el asunto “Estadística de postulación”. 123. Cadena de correos electrónicos de fechas 5 de abril de 2021, de Francisco Cristi Cortes a Gerardo Figueroa y otro, con el asunto “Facturación licencias Microsoft”. 124. Cadena de correos electrónicos de fechas 27 de febrero de 2018 a 29 de abril de 2018, de Francisco San Martín a Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Ayuda en PayRoll”. 125. Correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2018 entre Daniel González Faría y Francisco Cristi Cortes, con el asunto “Modelo central telefónica”. 126. Correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2019, entre Jhon Rivera González y Francisco Cristi Cortes y otro, con el asunto “Proceso y avance datos de acreditación Valle Central”. 127. Correos electrónicos de fechas 17 y 18 de diciembre de 2020 entre Lorena Montiel y Bruno Ariel Aranda Rojas y otros, con el asunto “Urgente reporte re matricula – matricula alumnos nuevos”. 128. Correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2021, entre Maiker Eduardo Muñoz Cárdenas



y Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Retorno trabajo presencial”. 129. Propuesta comercial de Bettersoft a Instituto Profesional Valle Central de fecha 6 de agosto de 2020, con atención a Francisco Cristi Cortes. 130. Correos electrónicos de fechas 6 y 7 de enero de 2020 entre Manuel Cataldo Pereira y Francisco Cristi Cortes y otros con el asunto “Problema con abonos de los alumnos vía Servipag”. 131. Cadena de correos electrónicos de fechas 11 de octubre de 2019 a 26 de diciembre de 2019, de Carolina Alcayaga a Jhon Rivera González y otros, con el asunto “Estimada Carola, ambiente pruebas ambas instituciones listo”. 132. Cadena de correos electrónicos de fechas 23 de mayo de 2018 y 29 de mayo de 2018 de Francisco Cristi Cortes a Héctor Valencia, con el asunto “Antecedentes funcionalidades U+”. 133. Correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2018 de Edgar Caro D’Angello a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Problemas con control de pago IPVC y UB”. 134. Cadena de correos electrónicos de fechas 3 de octubre de 2018 a 4 de octubre de 2018, de SOC empresas a Daniel González Faría y otros, con el asunto “SOC – REQ Instituto Profesional Valle Central | Folio INC000001996445 | Requerimiento revisar listas de full acceso”. 135. Cadena de correos electrónicos de fechas 18 de agosto de 2021 a 28 de julio de 2021, entre Francisco Contreras Córdova a Francisco Cristi con el asunto “Sedes activas para cotización servicio internet con y sin MPLS 202104182”. 136. Correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2021 de Elisa Cerda a Francisco Cristi Cortes y otros con el asunto “Facturas emitidas por Movistar a UB”. 137. Cotización RyC Servicios computacionales a Universidad Bolivariana – IP Valle Central contacto: Francisco Cristi Cortes. 138. Correo electrónico de fecha 24 de junio de 2019 de Francisco Cristi Cortes para Luis carrasco Astorga y otros con el asunto “traslado sede central preparación equipamiento informático”. 139. DESISTIDO 140. Acta reunión comité sistemas de fecha 5 de noviembre de 2019 de Universidad Bolivariana. 141. Anexo contrato servicio de mantención software Manager de fecha 3 de diciembre de 2021. 142. Anexos casa central de Universidad Bolivariana y Valle Central Instituto Profesional. 143. Anexos personal U. Bolivariana – IPVC. 144. Carta de fecha 10



de junio de 2020, de Francisco Cristi Cortes a Carabineros de Chile. 145. Carta de fecha 30 de enero de 2020, de Francisco Cristi Cortes a Karla Espinoza. 146. Cadenas de correos electrónicos de fechas 6 de noviembre de 2020 a 11 de marzo de 2021, de Ernesto Mota Tabares a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto "Factura pendiente de pago Universidad Bolivariana". 147. Correos electrónicos de fechas 10 y 12 de septiembre de 2018 entre Eduardo Riady Hazbún con Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto "Caso estudiante CFT". 148. Cadena de correos electrónicos de fecha 10 de septiembre de 2018 de Luis Pérez a Eduardo Riady Hazbún y otro, con el asunto "Caso estudiante CFT". 149. Cadena de correos de fecha 14 de mayo de 2018 y 15 de mayo de 2018 de Luis Marcelo Segura Pérez a Cristian Gutiérrez Gutiérrez y otro, con el asunto "Consulta urgente". 150. Cadena de correos de fecha 17 y 18 de julio de 2018 de Evelyn Becerra Rodríguez a Lorena Montiel y otros, con el asunto "Datos de contactos / Solicitud Sede Los Ángeles – Informática". 151. Cadena de correos electrónicos de fecha 21 de agosto de 2018 de Daniel González Faría a Francisco Cristi Cortes, con el asunto "Datos servidores". 152. Correo electrónico de fecha 14 de abril de 2020 de Horacio Ríos Domic a Bernardino Sánchez y otros, con el asunto "Envía Link para reuniones de mañana". 153. Evaluación de fecha 22 de mayo de 2019 de call center admisión Universidad Bolivariana de Lorena Muntiel a Soporte@ubolivariana.cl y otro. 154. Correo electrónico de fecha 21 de marzo de 2019 de Daniel González Faría a Francisco Cristi Cortes, con el asunto "Forzar contraseña". 155. Cadena de correos electrónicos de fecha 6 de marzo de 2018 de Jhon Pozo Ordenes a Francisco Cristi Cortes, con el asunto "Instalación accesorio Smart Bunker". 156. Cadena de correos electrónicos de fechas 20 de agosto de 2018 a 21 de agosto de 2018 de Gonzalo Carter Espinoza a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto "Wi-fi sede Curicó". 157. Cadena de correos de fecha 14 de agosto de 2018 de Eduardo Riady Hazbún a Lorena Montiel y otros, con el asunto "Landing Zeus". 158. Cadena de correos electrónicos de fecha 17 de diciembre de 2019 a 30 de diciembre de 2019 de Jhon Rivera González a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto "Migración sitio U+ Valle Central".



159. Correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2018 de ECVL-Unified notification a Francisco Cristi Cortes y otro, con el asunto “Open Value subscription 45 Day Remainder Notification”. 160. Correo electrónico de fecha 26 de enero de 2018 de José Fernando Contreras Concha a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Partida de facturación electrónica en Universidad Bolivariana a partir del 30 de enero de 2018”. 161. Cadena de correos electrónicos de fechas 4 y 6 de agosto de 2018, de Cristian Gutiérrez Gutiérrez a Francisco Cristi Cortes y otros, con el asunto “Problema sistemas U+ IPVC”. 162. Correo electrónico de Francisco Cristi Cortes a Germán Valenzuela y otros, con el asunto “Respaldo de manifestación de voluntad del postulante”. 163. Cadena de correos de fecha 12 de diciembre de 2019 a 16 de diciembre de 2019 de Daniel Acevedo a Lorena Montiel y otros, con el asunto “Reunión servicios caudales Telecom-Generar OC”. 164. Cadena de correos de fecha 16 de mayo de 2018 a 23 de julio de 2018 de Carolina Chávez Fernández a Francisco Cristi Cortes y otro, con el asunto “Servidores”. 165. Cadena de correos de fecha 12 de septiembre de 2018 a 13 de septiembre de 2018 de Francisco Cristi Cortes a Carolina Chávez Fernández y otros con el asunto “Síntesis reunión”. 166. Cadena de correos electrónicos de fecha 26 y 27 de agosto de 2019, de Víctor Araya a Francisco Cristi Cortes y otro, con el asunto “Solicita asesoría”. 167. Cadena de correos electrónicos de fechas 1 de enero de 2021 a 23 de febrero de 2021, de Francisco Cristi Cortes a NCLobares@infocorp.cl y otro, con el asunto “Solicita cotizar renovación Open Value suscription 30 Day Renewal Notification”. 168. Correo electrónico de fecha 18 de marzo de 2019 de Francisco Cristi Cortes a Edgar Caro, con el asunto “Solicitudes de área calidad depto. informática”. 169. Cadena de correos de fecha 20 de marzo de 2020, de Lucy Kunstmann a Support@universidadbolivariana.freshdesk.com y otros, con el asunto “Solicita redireccionamiento de teléfono fijo a celular”. 170. Cotización de servidores emitida por Opciones Sistemas de Información a Universidad Bolivariana – IPP Valle Central, con atención a Francisco Cristi Cortes de fecha 2 de octubre de 2018. 171. Cotización de servidores emitida por Opciones Sistemas de



Información a Universidad Bolivariana – IPP Valle Central, con atención a Francisco Cristi Cortes de fecha 21 de septiembre de 2018. 172. Cotización de RyC Servicios Computacionales a Universidad Bolivariana – IP Valle Central, contacto Francisco Cristi de fecha 23 de mayo de 2019. 173. Cotización de RyC Servicios Computacionales a Universidad Bolivariana – IP Valle Central, contacto Francisco Cristi de fecha 1 de abril de 2019. 174. Directorio Casa Central UB – Valle Central Instituto Profesional. 175. Listado correos electrónicos ejecutivos admisión UB – IPVC. 176. Resumen de iniciativas y proyectos informáticos UB-IPVC de fecha 7 de enero de 2020. 177. Resumen de iniciativas y proyectos informáticos UB-IPVC. 178. Resumen de iniciativas y proyectos informáticos UB-IPVC de fecha 19 de diciembre de 2019. 179. Acta sesión extraordinaria de directorio de fecha 13 de abril de 2017 en la que consta personería Sociedad Educacional del Maule S.A. 180. Tabla reunión comité sistemas Universidad Bolivariana de fecha 5 de noviembre de 2019. 181. Tabla reunión comité sistemas Universidad Bolivariana de fecha 19 de diciembre de 2019. 182. Set de 2 imágenes de auto chocado color plateado. 183. Patente de vehículo N° CY FD 13. 184. Padrón de vehículo patente N° CY FD 13, marca Subaru, modelo All New Legacy, color Blanco Satín PE, contribuyente Cristi Cortes Francisco Javier; respectivo certificado de emisiones contaminantes y certificado de revisión técnica del año 2021. 185. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados N° de folio 500436073132. 186. Licencia de conducir de Francisco Javier Cristi Cortes. 187. Boleta de honorario electrónica N° 4305, consulta médica psiquiátrica Dra. Paulina Corsi Slimninng respecto de Francisco Javier Cristi Cortes, de fecha 19 de junio de 2022. 188. Boleta de honorario electrónica N° 238, consulta médica respecto de Francisco Javier Cristi Cortes, de fecha 02 de junio de 2022. 189. Set de 3 boletas de Farmacia Cruz Verde. 190. Certificado médico de doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, respecto de Francisco Cristi Cortes, de fecha 2 de agosto de 2022. 191. Receta médica de Clonex (Clonacepan) emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 16 de febrero de 2022. 192. Receta médica de



Brintellix, Buxon y Rimox emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 19 de julio de 2022. 193. Set de 4 fotografías de cajas de remedios. 194. Receta médica de Escitalopran y Brintellix emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica. 195. Receta médica de Buxon y Escitalopran emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 26 de abril de 2022. 196. Boleta de honorario electrónica N° 4056, consulta médica psiquiátrica, doctora Paulina Corsi Slimninng respecto de Francisco Javier Cristi Cortes de fecha 9 de junio de 2022. 197. Boleta de honorario electrónica N° 3821, consulta médica psiquiátrica, doctora Paulina Corsi Slimninng respecto de Francisco Javier Cristi Cortes de fecha 26 de abril de 2022. 198. Receta médica de Escitalopran, Buxon, Dilasedan y Clonazepan emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 9 de junio de 2022. 199. Receta médica de Dilasedan y Clotiazepan emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 26 de abril de 2022. 200. Receta médica de Rimox emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 19 de junio de 2022. 201. Receta médica de Escitalopran y Buxon emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 26 de abril de 2022. 202. Receta médica Clonex CD y Clonazepan emitida por la doctora Paulina Corsi Slimninng, médico psiquiátrica, de fecha 26 de abril de 2022. 203. Cadena de correos electrónicos entre Karen Nienmann, Eduardo Ulloa, con copia de Francisco Javier Cristi Cortes, con el asunto “Finiquito transacción - Honorarios - F Cristi” entre el 17 de mayo y 20 de mayo de 2022. 204. Cadena de correos electrónicos entre Francisca Vial, Karen Nienmann, Eduardo Ulloa y Marcela Tiznado con copia de Francisco Javier Cristi Cortes, con el asunto “Finiquito transacción - Honorarios - F Cristi” entre el 17 de mayo y 2 de julio de 2022. 205. Correo electrónico enviado por Karen Nienmann a Fvh@eyco.cl; ecisternas@cbiobio.cl; y Francisco Javier Cristi Cortes, con el asunto “Documento finiquito” y dos documentos adjuntos: “Finiquito Transacción – Honorarios F Cristi – 17 05 2022” y “Observaciones al documento”. 206. Correo electrónico enviado por Francisco Javier Cristi Cortes a Francisca Vial; Eugenio



Cisternas y KarenNienmann@gmail.com de fecha 17 de mayo de 2022, con el asunto “Noticias UBolivariana”. 207. Cadena de correos electrónicos entre Francisco Javier Cristi Cortes, Francisca Vial, Karen Nienmann y Eugenio Cisternas, entre el 2 de marzo de 2022 y 12 de mayo de 2022, con el asunto “Re: Informe de Remuneraciones FRANCISCO JAVIER CRISTI CORTES AÑO 2021”. 208. Órgano Colegiado Superior de las Instituciones de Educación Superior (actualizado al 17 de noviembre de 2020) de la Superintendencia de Educación Superior. 209. Órgano Colegiado Superior de las Instituciones de Educación Superior (actualizado al 04 de marzo de 2022) de la Superintendencia de Educación Superior. 210. Ficha técnica de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Bolivariana de la Superintendencia de Educación Superior. 211. Ficha técnica de Instituciones de Educación Superior del Instituto Profesional Valle Central de la Superintendencia de Educación Superior. 212. Ficha de Institución Privada de Instituto Profesional Valle Central, del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. 213. Carta dirigida a la comunidad universitaria de fecha 31 de marzo de 2020, firmada por Bernardino Sánchez Vera, rector Universidad de Aconcagua y Horacio Ríos Domic, rector de Universidad Bolivariana. 214. Acta Asamblea General Extraordinaria de Socios “Corporación Universidad Bolivariana”, de fecha 29 de septiembre de 2017, protocolizada bajo el N° de repertorio 15925/2017 ante el Notario Patricio Zaldívar. 215. Acta General Extraordinaria de Accionista de la Sociedad Educacional del Maule S.A., de fecha 22 de abril de 2016, protocolizada con el N° 5946/2016 ante la Notario María Loreto Zaldívar. 216. Acta sesión extraordinaria Junta Directiva Corporación Universidad Bolivariana, de fecha 29 de abril de 2016, protocolizada con el N° 6457/2016 ante la Notario María Loreto Zaldívar. 217. Acta de Reunión Extraordinaria de Directorio de Sociedad Educacional del Maule S.A., de fecha 4 de noviembre de 2004, bajo N° de repertorio 1782- 2004, ante Notario Felipe Quilodrán. 218. Noticia del portal CiperChile, titulada “Instituto Valle Central: crisis por millonario reparto de ganancias y pagos a empresas relacionadas” en el link: <https://www.ciperchile.cl/2013/07/29/instituto-profesional-vallecentral-crisis->



pormillonarioreparto-de-ganancias-y-pagos-a-empresasrelacionadas 219. Noticia del portal La Tercera, titulada “Los 7 mil millones que permitieron salvar a la Universidad de Aconcagua”, de fecha 08 de noviembre de 2020, en el link: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-7-milmillones-que-permitieron-salvara-launiversidad-deaconcagua/FUUP7RL2EJC6JNSYRC7SBY4QSY/> 220. Noticia de portal Radio Bio Bio: “U. Bolivariana toma control de U. Aconcagua: Preparan fusión para Admisión 2022”, de fecha 01 de abril de 2020, en el link: <https://www.biobiochile.cl/especial/educacion/noticias/2020/04/01/u-bolivarianatomacontrol-de-u-de-aconcagua-preparan-fusion-paraadmision-2022.shtml> 221. Cadena de correos de fecha 17 de mayo de 2021 a 26 de mayo de 2021, de Francisco Cristi Cortes a Ernesto Mota Tavares y otros, con el asunto “Solicita modificación O-C: Autoriza sistema firma electrónica certificado de títulos”. 222. Cadena de correos de fecha 6 y 7 de mayo de 2021, de Francisco Cristi Cortes a Ernesto Mota Tavares y otros, con el asunto “Autoriza sistema firma electrónica certificado de títulos”. 223. Acta de entrega final de Telefónica a Telecomunicaciones del Sur S.A., con atención a Francisco Cristi Cortes de fecha 20 de junio de 2018. 224. Tabla relativa a contratos informáticos Bloque 1 (Telco), respecto U Aconcagua; Com Sur, UB, IPVC. 225. Presupuesto integrado de inversión y gasto respecto de Universidad Aconcagua Instituto Profesional Valle Central – Universidad Bolivariana. 225. Acta de recepción de proyecto – Arriendo con instalación de Movistar Empresas a Comunicaciones del Sur con atención a Francisco Cristi, de fecha 14 de diciembre de 2020. 226. Anexo N° IV “Servicio de datos” de GTD Teleductos respecto de Telecomunicaciones del Sur S.A., de fecha 13 de agosto de 2019. 231. Cadena de correos electrónicos de fecha 14 de enero de 2021 a 21 de enero de 2021 de Pablo Mutizabal Cárdenas a Lorena Montiel y otros, con el asunto “Estado Matricula No Presencial”. 227. Cadena de Correos de fecha 7 de septiembre de 2021 a 29 de septiembre de 2021, de [jrodriguez@bettersoft.cl](mailto:jrodriguez@bettersoft.cl) a Edgar Caro D’anello y otros, con el asunto “Ticket (31742- 31743) UC-IPVC-UB. 228. Cotización N° 09982 de Upago, dirigida a Universidad Bolivariana / U. Aconcagua / I.P. Valle Central. 229. Cadena de



correos de fecha 13 de agosto de 2021 de Jhon Rivera González a Eduardo Ulloa y otros, con el asunto “Sistema NMP / UB/IPVC”. 235. Anexos telefónicos de trabajadores de IPVS -UB – Gerencia – Casa Central. 236. Presupuesto integrado de inversión y gasto respecto de Universidad Aconcagua Instituto Profesional Valle Central – Universidad Bolivariana de fecha 7 de abril de 2021. 237. Documento Sedes y Enlaces UB – IPVC – UAC, “Nomina de sedes con enlaces. Se incluyen recomendaciones” de Francisco Javier Cristi Cortes. 230. Perfil de la página web LinkedIn, extraídos con fecha 21 de agosto de 2022 de las siguientes personas: a. Ale Tapia. b. Anissa Begoña Parra Navarrete. c. Bruno Aranda Rojas. d. Emerson Díaz Albornoz. e. John Michael Rivera González. f. Luis Marcelo Segura Pérez. g. Mayker Eduardo Muñoz Cárdenas. h. Willy Sánchez.

**Confesional:** Absuelve posiciones en representación de Universidad de Aconcagua, y Universidad Bolivariana don Jaime Duhart Aillon, cédula nacional de identidad N° 4.681.205-0.

En representación de Sociedad Educacional del Maule S.A., comparece y absuelve don German Martínez Yelor, cédula nacional de identidad N°9.251.359-9.

**Testimonial:** Comparecen y declaran don Daniel González Faría, Rut N° 26.263.557-0. 2, don Pablo Icaza Soletic, Rut N° 16.937.476-7 y doña Gloria Niemann Vizcarra, Rut N° 7.193.759-3.

### **Exhibición de documentos:**

I.-RESPECTO DE UNIVERSIDAD BOLIVARIANA En cuanto a la documentación relacionada al concepto prestaciones, solicita se haga efectivo el apercibimiento legal correspondiente respecto a los documentos: N°1, 2, 3, 4 y 6 que o fueron exhibidos. El N° 5 se dio por cumplido y se incorpora. En cuanto a la documentación relacionada con el concepto de Multirut, Pide hacer efectivo el apercibimiento legal respecto de los documentos N° 1, 4, 5, 6 7, y 8 que n o fueron exhibidos. Respecto del N° 2 y 3 se da por cumplido y se incorpora. Respecto del



N°9, solo se dio por cumplido respecto de los trabajadores don Eduardo Reddy Hazbún, Annisa Begoña Parra Navarrete y Luis Marcelo Segura Pérez. Respecto de los trabajadores individualizados en las letras a, b, c, d, e, f, g, i, no fueron exhibidos y pide apercibimiento legal.

II.- RESPECTO DE SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A. En cuanto a la documentación relacionada al concepto prestaciones, pide apercibimiento legal respecto de los documentos N° 1, 2, 4 y 6.- Se desistió respecto del documento N° 3.- Se dio por cumplida la diligencia respecto del documento N° 5.- En cuanto a la documentación relacionada con el concepto de Multirut, Se da por cumplida la diligencia respecto de los documentos N° 1, 2 en su totalidad. El N° 3 se da por cumplida parcialmente respecto de las juntas extraordinarias 2020, 2021 y 2022. Pide apercibimiento. Respecto del N° 9 se da por cumplida la exhibición.

III.- RESPECTO DE UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA En cuanto a la documentación relacionada al concepto prestaciones La parte solicita se haga efectivo el apercibimiento legal correspondiente respecto a los documentos N° 1, 2, 3, 4, y 6.- Se da por cumplida respecto del documento N° 5.- En cuanto a la documentación relacionada con el concepto de Multirut, Se da por cumplida respecto del documento N° 1.- Respecto de los documentos N° 2 y 3, se cumple parcialmente y pide apercibimiento. En cuanto al N° 9 cumple respecto de don Eduardo Ulloa, Sandra Guerrero, Marcelo Herrera, Mariela López, Mayker Muñoz y pide apercibimiento legal por no haber cumplido con la exhibición respecto de Bruno Aranda, Anissa Parra, Munis Hazbún, Reddy Hazbún, Luis Segura.

**Oficios:** Se incorpora respuesta de oficio solicitado a SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR; SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES y se desiste de los restantes.

**SEPTIMO:** Que la parte demandada UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA, incorporó los siguientes medios de prueba



**Documental:** 1.- Finiquito de contrato de trabajo entre la Universidad Bolivariana y don John Michael Rivera González suscrito con fecha 9 de noviembre de 2021 ante don Gino Beneventi Alfaro, notario interino de la 45 notaría de Santiago. 2.- Contrato de trabajo de John Michael Rivera González con la Universidad de Aconcagua suscrito con fecha 1 de octubre de 2021.

**Confesional:** Se desiste.

**Testimonial:** Comparece y declara don 1. Luis Marcelo Herrera Hueche, CI 8.981.641-6.

**Exhibición de documentos:** Se tiene por cumplida.

**Oficios:** Se desiste.

**OCTAVO:** Que la parte demandada CORPORACIÓN UNIVERSIDAD BOLIVARIANA incorporó los siguientes medios de prueba:

**Documental:** 1.- Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, de fecha 2 de febrero de 2018. 2.- Acta Elección Junta Directiva Universidad Bolivariana, reducida a escritura pública, con fecha 19 de mayo de 2022. 3.- Acta de Cargos de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, reducida a escritura pública, con fecha 19 de mayo de 2022. 4.- Boletas de Honorarios del demandante, correspondientes a todo el año 2021.

**Confesional:** Se desiste

**NOVENO:** Que la parte demandada SOCIEDAD EDUCACIONAL DEL MAULE S.A. - INSTITUTO PROFESIONAL VALLE CENTRAL- incorporó la siguiente prueba:

**Documental:** 1.- Convenio de colaboración recíproca entre la Universidad Bolivariana y la Sociedad Educacional del Maule S.A., sostenedora del Instituto Profesional Valle Central, suscrito con fecha 11 de febrero del año 2005.



**Confesional:** Se desiste

**Testimonial:** Se desiste

**Exhibición de documentos:** Se dio por cumplida

**Oficios:** Se desiste

**DECIMO:** Que de acuerdo al artículo 7° del Código del Trabajo, el contrato es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia o subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, toda prestación de servicios en los términos señalados hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

De lo expuesto se desprende, que el trabajo que protege la norma jurídica, es aquel personal, consensual, bilateral y oneroso, que se realiza para otra persona de manera profesional, exclusiva y bajo subordinación o dependencia.

Que además, son reconocidos los elementos que surgen de su definición, a saber, los sujetos del contrato; trabajador y empleador; la prestación del servicio; la remuneración y la subordinación y dependencia, siendo estos elementos los que permiten distinguir una relación laboral, sin embargo, el que resulta esencial, a la hora de determinar su existencia es la subordinación o dependencia.

**UNDECIMO:** Que en este contexto, recae en la parte demandante la carga probatoria relativa a establecer fehacientemente la existencia del vínculo laboral, por tanto le corresponde comprobar, que quien demanda, posee la calidad de trabajador y ha prestado servicios personales intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo, como lo describe el artículo 3° letra b) del Código del ramo, que a su vez, el demandado, efectivamente ha cumplido un rol de empleador, es decir, que la demandada ha



utilizado y se ha beneficiado de los servicios personales de la actor también en un contexto de subordinación y dependencia; que los servicios prestados se conocen con precisión, sin ser necesario pormenorizarlos; que los ha prestado por cuenta ajena, esto es, los riesgos de lo favorable o desfavorable de los resultados del trabajo los asume el empleador y así también el monto de la remuneración convenida.

**DUODECIMO:** Que respecto de la subordinación y dependencia, siendo el elemento substancial, la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en que sus manifestaciones comunes son; la obligación de asistencia del trabajador a prestar los servicios en las oportunidades convenidas en el contrato, el cumplimiento de una jornada de trabajo, el sometimiento al poder de dirección del empleador a través de órdenes, instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad en la ejecución de la función y del mismo modo al poder disciplinario del empleador.

En particular, la Excma. Corte Suprema ha señalado que “el código del trabajo define el contrato individual de trabajo en el artículo 7 como “una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, este, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada y para precisar, si se está en presencia de un contrato de trabajo, será esencial desentrañar si concurre o no subordinación de parte del trabajador, puesto que este es en definitiva el elemento caracterizador y ello puede – y suele- hacerse a través de un sistema de indicios, que orientan en el sentido de entender que existe esa dependencia o sujeción en la relación de trabajo, tales como obligación de asistencia, cumplimiento de horario, sometimiento a instrucciones y directivas del empleador, prestación de servicios en forma continua y permanente, estar sometido a supe vigilancia y control “ (Cuarta Sala. Rol. 21.637 – 2017 de 22 de enero de 2018)



**DECIMO TERCERO:** Que dicho todo lo expuesto, se tiene presente que el demandante y la Universidad Bolivariana suscribieron un contrato de prestación de servicios a honorarios con fecha 02 de febrero de 2018. En razón de este contrato, el demandante se obligó a prestar servicios independientes en asesoría, mantención, coordinación y gestión de todos los sistemas informáticos y servicios complementarios para la Universidad Bolivariana, lugar en el que prestará sus servicios, sin perjuicio la misma cláusula indica que además prestará servicios con las instituciones con las cuales la Corporación Universidad Bolivariana mantiene un convenio de colaboración recíproca, y que se identifican como Sociedad Educacional del Maule y el Centro de Formación Técnica Barros Areana Limita e E – VALLEY SpA.

Describe el contrato que las funciones que correspondía cumplir al Sr. Cristi, consistían en fiscalizar, optimizar e instruir las siguientes labores, sin perjuicio de las labores adicionales que le correspondían en virtud del Manual de cargos de la Institución, controlar y revisar la información en U+, correcta imputación de la información, la instalación y configuración del sistema U+ en los clientes: implementar, administrar y revisar Plataforma Moodle y Aulas Virtuales que desarrolle la institución; actualización constante de los recursos tecnológicos que necesite la plataforma, administrar bases de datos de los alumnos, coordinación con los encargados del soporte plataforma en las sedes de la Institución, desarrollar y evaluar nuevas aulas virtuales para el uso interno y externo; recepcionar y soportar lo relacionado a las plataformas de aprendizaje de los alumnos, Explotación de Bases de datos, actualización y mejora de sitios web administrar bases de datos de los alumnos, coordinación con los encargados del soporte la plataforma de aprendizaje de los alumnos, explotación de bases de datos, actualización y mejora de los sitios web, desarrollo de aplicaciones web y servidor e integrador de tecnologías, administrar sistema informático en la sede , mantener Hardware y Software de la sede en condiciones óptimas para el correcto uso de funcionarios y población estudiantil. Realizar soporte informático y controlar permanentemente estas acciones, administrar conectividad a nivel nacional de



manera óptima y entre otras tareas específicas, capacitar a los empleados de la Institución y eventualmente a los alumnos en el uso de la plataforma y sistemas; organizar su gestión en reuniones de trabajo con su equipó y/o demás integrantes de la Institución, presentar informes de mejoría, implementación y/o resultados al Directorio de la Institución.

La cláusula tercera del contrato establece que las partes establecen expresamente que se trata de servicios profesionales independientes regidos por el Código Civil y por lo tanto no están las partes ligadas por vínculo de subordinación y dependencia. No estaría sujeto al cumplimiento de horario ni bajo las órdenes o dirección de la Corporación Universidad Bolivariana, ya que su función la desarrollaría de manera autónoma e independiente.

Así también contempla que los honorarios que se pagarían al Sr. Cristi, serían contra la presentación de una boleta de honorarios remitida al correo electrónico que indica, dejando expresa constancia que ambas partes se encuentran en pleno conocimiento de que se trata de un contrato de carácter civil de prestación de servicios a honorarios, sin supervisión directa ni sujeción de horarios, regulándose por los artículos 2006 y siguientes del Código Civil y quedando el prestador del servicio en libertad para contratar otros servicios para con terceros en la forma que estime conveniente.

Atendida la naturaleza de la prestación quedó establecido que no devengaba derecho a vacaciones y que la Corporación Universidad Bolivariana no tendría la obligación de efectuar pagos de cotizaciones previsionales, quedando de cargo del propio prestador esta obligación en la AFP y en Fonasa e Isapre.

Se estableció que serían consideradas como herramientas de trabajo de propiedad de la empresa el hardware, software los correos electrónicos y demás elementos que fuesen puestos a su disposición por lo que debía utilizarse y destinarse para un uso estrictamente profesional.



**DECIMO CUARTO:** Que en consonancia con la naturaleza del contrato, recordando que se trata de prestación de servicios profesionales a honorarios regulados por el artículo 2006 y siguientes del Código Civil, que establece normas para el arrendamiento de servicios inmateriales, que consisten en aquellas obras inmateriales o en que predomina la inteligencia por sobre la obra de mano, fueron incorporadas las boletas de honorarios que emitió y presentó el Sr. Cristi y que aparecen registradas en el SII, a través de su informe anual y de los cuales se lee que en el año 2018 emitió boletas a contar del mes de marzo y hasta el mes de diciembre. Para el año 2019, emitió boletas entre enero a junio de 2019, entre agosto a octubre de 2019 y en el mes de diciembre de 2019, es decir, se vieron interrumpidos los servicios durante el mes de julio de 2019 y noviembre de 2019.

Luego el año 2020, emitió boletas los meses de febrero y marzo, luego entre mayo a octubre y posteriormente en el mes de diciembre, interrumpiéndose los servicios el mes de enero, abril y noviembre de 2020.

Para el año 2021, emitió boletas de honorarios entre los meses de enero a junio y entre agosto a octubre y finalmente para el mes de diciembre de 2021, interrumpiéndose los servicios los meses de julio y noviembre de 2021.-

Que en el mismo contexto, la exhibición documental consistente en declaraciones de renta de los años 2019 a 2022, da a conocer que el Sr. Cristi efectuaba su declaración anual de renta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 N° 2 de la Ley de Rentas, que dispone que quedan afectos los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales o de cualquier otra profesión u oficio no comprendida en la primera categoría, atendido su giro de servicios profesionales de ingeniería y actividades de consultoría.

Por otro lado, se aprecia que durante el periodo de prestación de servicios fueron suscritos dos documentos denominados Transacción, renuncia y finiquito, entre la Universidad Bolivariana y el Sr. Francisco Javier Cristi Cortes, en los que se ratifica la naturaleza de la relación contractual que mantuvieron las partes



hasta el 30 de junio de 2019, que aparece firmado por el demandante y si bien el segundo que abarca el periodo hasta el 31 de octubre de 2019, no lo está, cierto es que no se incorpora prueba ni hay indicios que permiten establecer fundadamente que existió una reserva de derechos respecto de alguna disconformidad sobre los servicios prestados.

**DECIMO QUINTO:** Que en consecuencia, las probanzas descritas solo confirman la existencia de una prestación de servicios ajena a una relación de trabajo en los términos del artículo 7 y 8 del Código del ramo, que no logra ser revertida con la información que incorpora el demandante relativa a los certificados de AFP y AFC, por cuanto, el de AFP, emitido con fecha 22 de junio de 2022, evidencia que prestando servicios para la Universidad Bolivariana RUT. 71.477.600 – 2, también lo hacía para otra empresa Rut. 76.382.685 – 6, al menos entre marzo a septiembre de 2018, lo que descarta la exclusividad y el hecho de que la AFC, de acuerdo al documento emitido con la misma fecha, 22 de junio de 2022, informe que no se registran pagos del seguro de cesantía por parte de la Universidad, en ningún caso puede considerarse un incumplimiento, teniendo en consideración la naturaleza civil de los servicios prestados, sin perjuicio de que tampoco se comprobó que en los meses y años posteriores, la situación fue diferente en razón de algún anexo contractual, cuya existencia tampoco se mencionó ni acreditó.

Ahora bien, el organigrama de TI que se incorpora por el mismo actor, da a conocer que en el área de la Dirección Corporativa de Tecnología de la Información se desempeñaban el Sr. Cristi y el Sr. Mustizabal, pero cierto es que no se desconoce el hecho de que el demandante trabajaba para la Universidad Bolivariana y cumplía funciones de jefatura respecto de un grupo de personas, sino se trata de la calidad jurídica en que lo hacía.

Cabe recordar, que entre las funciones que definían el cargo del demandante, estaban precisamente las de fiscalizar, controlar la información, su correcta imputación, implementar y administrar plataformas, administrar bases de los



alumnos, coordinar con los encargados de soporte, desarrollar nuevas aulas virtuales, explotación de bases de datos. Administración del sistema informático y administrar conectividad nacional, entre otras, lo que queda plasmado a través de los diversos correos electrónicos y las conversaciones de whatsapp que han sido incorporados a la causa y que manifiestan el rol y funciones que ejercía el demandante y que resultan coincidentes con las descritas en el contrato y las respuestas que se entregan en este intercambio de conversaciones no son más que un ejemplo de aquello, pues una prestación de servicios a honorarios, no está exenta de directrices, del cumplimiento de una jornada de trabajo acorde al funcionamiento de la institución o establecimiento en este caso y a la naturaleza de los servicios que prestaban, que aun cuando puedan considerarse esenciales, no satisfacen el requerimiento de subordinación o dependencia que exige un vínculo laboral del Código del Trabajo y que exige un sometimiento en la forma y condiciones que establece el empleador al ejercer su potestad disciplinaria.

En este escenario, tampoco ayudan para considerar lo contrario, el correo electrónico en que se plantean horas extras trabajadas, el que además devela que aquellas debían ser autorizadas, lo que no consta. Del mismo modo, los permisos únicos colectivos de 31 de mayo de 2021 al 04 de junio de 2021, del 21 al 25 de diciembre de 2020 y de 11 al 25 de junio de 2020, así como los certificados laborales extendidos a los Sres. Sánchez Pineda y Mayker Muñoz, tampoco permiten configurar una subordinación y dependencia pues como se dijo, la naturaleza de las funciones aun cuando fuesen esenciales para el funcionamiento del establecimiento, como lo fue principalmente en época de pandemia no se oponen a una prestación de servicios de carácter civil y el extender certificados respecto de otros trabajadores tampoco lo convierte en empleador, teniendo en cuenta que estaba a cargo de un área cuya experticia le permitía calificar idoneidad y entre sus funciones se encontraba precisamente aquella consistente en capacitar a los empleados de la Institución y



eventualmente a los alumnos y además, porque debía organizar su gestión en reuniones de trabajo con su equipo directo.

En el mismo contexto y funciones, debía llevar a cabo reuniones de trabajo, no solo con ese equipo directo, sino también podía involucrar otros integrantes de la Institución, como dan cuenta las actas de 26 de octubre, 05 de noviembre de 2019 y 14 de enero de 2020.

En este acápite y en lo relativo a que en una de ellas, aparece el demandante participando como Director Nacional de TI, no otorga necesariamente subordinación y dependencia, pues el contrato también indicaba que la prestación de sus servicios no era solo respecto de la Universidad Bolivariana, sino también correspondía desarrollarlos para aquellas otras instituciones con las que dicho establecimiento mantenga un convenio de colaboración recíproca, que en los hechos existía, de acuerdo al contrato, con Sociedad Educacional del Maule S.A., el Centro de Formación Técnica Barros Arana Limita e E VALLEY SpA, y a los convenios incorporados en la audiencia de juicio, de fecha 11 de febrero de 2005, con la Sociedad Educacional del Maule S.A., de 01 de julio de 2019 con el Instituto Valle Central y la Universidad de Aconcagua y de 01 de julio de 2020 entre Corporación Universidad Bolivariana y la Corporación Universidad de Aconcagua.

**DECIMO SEXTO:** Que así las cosas, los antecedentes señalados y demás incorporados, no resultan suficientes para modificar la naturaleza del vínculo y en particular, el comprobante para petición de permisos los días 16 y 17 de septiembre de 2019, que registra que será con cargo a vacaciones legales, no es suficiente por sí solo para configurar un vínculo en el marco de lo descrito en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, teniendo en consideración que la interpretación debe hacerse con la que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y en la especie, resulta inamovible que se trató de un contrato de prestación de servicios a honorarios, en cuyas cláusulas quedó establecido que no daba derecho a feriado legal, lo que se condice con la emisión de boletas,



pues existen meses durante cada año - 2 o 3 - en que no se prestaron servicios por lapsos que resultan superiores a los 21 días que eventualmente corresponderían a un trabajador dependiente, en un año calendario.

**DECIMO SEPTIMO:** Que por otro lado, la prueba confesional vertida por don Jaime Duhart Aillón en representación de la Universidad de Aconcagua y de la Universidad Bolivariana, ratificó que el Sr. Cristi prestaba servicios en el área tecnológica de la Institución a honorarios, cuyo contrato fue suscrito con la Universidad Bolivariana y dentro de un convenio de colaboración lo hacía también para Valle Central y Aconcagua y quien, al exhibirle el acta de reunión en que el Sr. Cristi aparece como Director Nacional de TI, señaló que se trataría de una referencia errada que no correspondía a la realidad.

El absolvente que compareció en representación de la Sociedad Educacional del Maule, don Germán Antonio Martínez, conocía al demandante en razón de su función y sabía que se desempeñaba prestando servicios en el área informática.

Luego, los testimonios vertidos por don Daniel González Farías, dijo que el Sr. Cristi era su jefe en el área de informática y todas las solicitudes de los distintos departamentos se canalizaban a través de Francisco Cristi, a veces entregaban un reporte lo que no era común y podía ser verbal, luego de algún encargo. Los trabajos se discutían con él. Si bien señaló que sabía que el demandante era Director Nacional de Informática, no aportó ningún otro antecedente que deleve la efectividad de que el cargo lo desempeñaba bajo subordinación y dependencia, pues en concordancia con lo que se viene diciendo, el nombre del cargo tampoco es capaz de modificar el vínculo jurídico que unió a las partes, sin perjuicio de que otro testimonio, como el de don Pablo Icaza, refirió que el Sr. Cristi era su jefe y su cargo era Jefe de Proyecto, luego refirió que el Sr. Cristi usaba una oficina chica como Jefe de Informática y más tarde al ser contrainterrogado por la parte de Universidad de Aconcagua, respondió que la jefatura de proyecto era Francisco Cristi, aunque que no estaba pendiente de los cargos específicamente,



ni de las líneas jerárquicas, lo que no otorga certeza tampoco de un cargo distinto al mencionado en el contrato de 02 de febrero de 2018.

Por otro lado, el testimonio incorporado por la Universidad de Aconcagua a través de don Luis Herrera, dejó ver que conocía al Sr. Cristi como encargado de computación, quien no tenía horario, relación contractual, ni dependencia jerárquica.

Es decir, se trata de declaraciones y dichos que no permiten contrastar la restante prueba mencionada, ni las conclusiones que se vienen estableciendo, para descartar que se configure una relación laboral bajo subordinación y dependencia, todo lo cual lleva a desechar la demanda.

**DECIMO OCTAVO:** Que siendo necesario determinar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia para poder emitir pronunciamiento respecto de las demás pretensiones expuestas en la demanda y no resultando esto determinado, no es posible emitir pronunciamiento respecto de la nulidad civil de las transacciones, que en todo caso debían ser a la luz de algún vicio en el consentimiento y lo alegado para sostener la nulidad relativa en base al vicio de fuerza no se probó, pues se debe recordar que la carga de la prueba recae en quien lo alega, como establece el artículo 1.698 del Código Civil.

Tampoco es viable poder emitir pronunciamiento respecto de la unidad de empleador y la existencia de un subterfugio atendido a que no se comprobó la existencia del vínculo contractual laboral que sirva de pie para establecer la clase de responsabilidad que eventualmente compete a las demandadas, sin perder de vista la forma en la que fueron emplazadas y que el petitorio tampoco mencionó ni especificó.

Así también, se ve impedido el tribunal de emitir pronunciamiento respecto de la Indemnización por años de servicio y sustitutiva de aviso previo, por cuanto se trata de indemnizaciones propias de la acción de despido injustificado, quedando claro en la audiencia preparatoria, que la misma parte demandante al evacuar el



traslado de la excepción de caducidad opuesta por los demandados, señaló que no se accionaba por despido injustificado y si no es en razón de una acción de ese tipo, las mismas carecen de objeto.

Finalmente en relación a las otras prestaciones demandadas, su causa es el eventual contrato de trabajo que no se probó, pues se trató de una prestación de servicios a honorarios, mismo destino que tendrá lo demandado por concepto de daño moral y lucro cesante pretendidos, que también obedecen al término de un contrato de trabajo, pues de acuerdo al contrato de prestación de servicios a honorarios podía ponerse término en cualquier momento y por cualquiera de las partes.

**DECIMO NOVENO:** Que la prueba ha sido apreciada como lo ordena el artículo 456 del Código del Trabajo sobre la base de la prueba aportada por las partes e incorporada en la audiencia de juicio y la no expresamente mencionada en nada modifica lo resuelto. Sobre lo mismo, resultan improcedentes los apercibimientos pedidos respecto de las exhibiciones de documentos solicitadas a las demandadas, al no haber sido cumplidas de manera íntegra, toda vez que las conclusiones del fallo lo han sido en base a los razonamientos expuestos y la restante prueba incorporada.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos, 1, 3, 7, 8, 9, 67 y siguientes, 453, 454 y 456 del Código del Trabajo y artículo 1560, 1564 y 1698 del Código Civil; se resuelve:

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de fecha 11 de julio de 2022, interpuesta por don Francisco Javier Cristi Cortés, en contra de Corporación Universidad Bolivariana, Sociedad Educacional del Maule – Instituto Profesional Valle Central y Universidad de Aconcagua.-

II.- Que sin perjuicio, no se condena en costas al demandante por estimar que litigó con motivo plausible.



Regístrese.

RIT : O-4345-2022

RUC : 22- 4-0414572-3

**Pronunciada por don (ña) CLAUDIA PAMELA SALGADO RUBILAR, Juez Titular (D) del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**

En Santiago a diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

